

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS
23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 1994

Nota de la Secretaría

1. El Subcomité de Comercio y Medio Ambiente celebró su quinta reunión los días 23 y 24 de noviembre de 1994 bajo la presidencia del Embajador Luiz Felipe Lampreia, del Brasil. Se adoptó el orden del día de la reunión reproducido en el aerograma PC/AIR/39.

2. El Presidente recordó que se había acordado centrar la presente reunión en un intercambio inicial de opiniones sobre el sexto punto del programa de trabajo: "el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales". Informó a las delegaciones que, conforme a lo solicitado en reuniones anteriores, la Secretaría estaba preparando documentación sobre los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales. Señaló que se habían realizado algunas deliberaciones iniciales sobre estas cuestiones en el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) como parte de la labor de seguimiento de la CNUMAD. En el informe del Presidente de dicho Comité sobre el seguimiento de los trabajos de la CNUMAD, incluido en el documento COM.TD/W/509, figuraba una reseña general de esa labor. El Subcomité, de ser necesario, volvería a examinar el primer punto de su programa de trabajo y después el tercero. A continuación trataría cualquier otro punto que las delegaciones desearan plantear.

Punto 6 del programa de trabajo

3. El representante de la Argentina dijo que hablar del efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados era prácticamente hablar de todos los temas que habían ocupado al Subcomité. Las prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado, así como las cargas e impuestos aplicados con fines ambientales, tenían estrecha relación con el acceso a los mercados. La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, tanto unilateral como multilateralmente, también tenían consecuencias con respecto al acceso a los mercados. En cambio, este punto era la única oportunidad para analizar los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales. El desafío que enfrentaba el Subcomité era dar una respuesta precisa y convincente que demostrara por qué y en qué condiciones el libre comercio podía ser beneficioso para el medio ambiente.

4. El orador explicó que, en términos económicos, cuando el precio de un producto reflejaba el costo real de los factores que intervenían en su producción y distribución, se podía presumir que había una eficiente asignación de los recursos. El "costo real" de esos factores, en una situación de equilibrio en competencia perfecta, estaba determinado por el mercado, es decir, por el libre juego de la oferta y la demanda. Si ese "costo real" estuviese por debajo del costo de reproducción de los factores intervinientes en el proceso productivo, se estaría frente a una distorsión del sistema de formación de precios, que llevaría a una sobreexplotación del recurso y eventualmente a su agotamiento prematuro.

En términos económicos, su precio sombra estaría por encima de su precio de mercado. Cabía preguntarse cuáles podían ser las distorsiones del sistema de formación de precios que afectaban negativamente al medio ambiente, es decir, cuáles serían las distorsiones del sistema de formación de precios que permitirían explotar un recurso natural por encima de su costo de reproducción, o sea, sobreexplotarlo. Existían varias, y el orador ofreció el ejemplo de los productos básicos. Al estar ubicados en el principio de la cadena productiva, podían ser particularmente sensibles a la falta de internalización de los costos ambientales y, al mismo tiempo, afectar a una amplia oferta de bienes. En los productos básicos, la más evidente de todas las distorsiones del sistema de formación de precios eran las subvenciones.

5. A este respecto, el orador citó una publicación de la OCDE titulada "The Environmental Effects of Trade": "En general, el comercio no está en la raíz de los problemas ambientales, los que se deben tanto a fallas de mercado (como la falta de internalización de los costos ambientales) como a fallas de política (como las subvenciones o los obstáculos al comercio). Las fallas de mercado ocurren cuando los mercados no reflejan los costos ambientales. Las fallas de política ocurren cuando las políticas públicas no corrigen, crean o exacerban las fallas de mercado". Esta publicación analizaba el problema con la perspectiva en que debía analizarse: cómo avanzar hacia la internalización de los costos ambientales en el precio de los productos y qué pasos se debía empezar a dar para lograr que el mercado incorporara esos costos.

6. No era posible presumir que todas las subvenciones que repercutieran de una u otra manera en los productos básicos tendrían necesariamente consecuencias ambientales negativas. No ocurría tal cosa con los incentivos para acelerar los cambios tecnológicos tendientes a incorporar métodos de producción ambientalmente sostenibles. Tampoco eran las subvenciones necesariamente la única distorsión del sistema de formación de precios que obstaculizaba la internalización de los costos ambientales en los productos básicos. Pero no era posible soslayar, si se quería abordar con seriedad la relación entre el comercio y el medio ambiente, que los cientos de millones de dólares dedicados anualmente a subvencionar la agricultura en países industrializados estaban lejos de tener un efecto neutro sobre el medio ambiente. Este ejemplo ponía de relieve la magnitud del problema. Otros sectores, como el de la pesca, a la que anualmente se dedicaban unos 54.000 millones de dólares en subvenciones, podían ilustrar igualmente esta preocupación, tal vez en forma menos dramática.

7. Se preguntó el orador cómo afectaban al medio ambiente las distorsiones del comercio de productos básicos; cómo llegaban a afectar, incluso sin consecuencias físicas transfronterizas, al medio ambiente de países totalmente alejados del lugar donde se desarrollaban esas prácticas. Señaló al menos los tres mecanismos siguientes que difundían o trasladaban esos efectos inmediatamente.

- a) Las subvenciones que afectaban a los productos básicos podían fomentar, y de hecho fomentaban en muchos casos, ineficientes asignaciones de recursos y, al actuar antes de la internalización de los costos ambientales, los precios "creaban y exarcebaban" una falla de mercado, para utilizar la expresión de la OCDE. Permitir que ciertos productores pudieran producir a un costo marginal superior a lo que sería el precio de no existir la subvención tenía un doble efecto perjudicial sobre el medio ambiente. Por una parte favorecía la sobreexplotación del recurso utilizado por los productores supuestamente beneficiados con la subvención. Aun suponiendo que ese deterioro ambiental no tuviese consecuencias físicas transfronterizas, el comercio internacional transmitía los precios reducidos por la subvención forzando a los productores radicados en otros países a sobreexplotar sus propios recursos ambientales, a riesgo de verse excluidos del mercado. En esas condiciones, el comercio internacional actuaba como vector que potenciaba y expandía los efectos ambientalmente negativos de esa ineficiente asignación de recursos en el país que subvencionaba.

- b) El sistema de formación de precios de los productos básicos estaba efectivamente distorsionado en la actualidad por la falta de internalización de los costos ambientales. Si no estuviese distorsionado, sería difícil explicar que, normalmente, los productos cuya elaboración tenía consecuencias ambientales neutras o relativamente menos negativas que otros análogos fuesen frecuentemente más caros que los productos elaborados con consecuencias ambientales negativas o relativamente más negativas. En otras palabras, a menudo podía observarse una relación inversamente proporcional entre los efectos ambientales generados por la producción de determinado producto y su precio. A mayor impacto negativo, menor precio. Así sucedía en el caso de alimentos "orgánicos", cuyo precio era normalmente superior al de los productos similares producidos con uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas y elementos destinados a mejorar su presentación. La "renta verde" generada por la creciente preocupación de los consumidores por el ambiente y por su propia salud no podía ser fácilmente incorporada en el precio. Esta especie de bonificación no alcanzaba para compensar la falta de internalización de los costos ambientales.
- c) Las restricciones que afectaban al acceso a los mercados de los productos básicos podían tener consecuencias ambientales negativas. Había consecuencias directas, pues al reducir los ingresos recibidos por los productores se les obligaba a recurrir a prácticas perjudiciales para el medio ambiente, como el abandono de los sistemas de rotación de cultivos, la incorporación de tierras marginales a la producción y el empleo creciente de prácticas intensivas de cultivo. Había consecuencias indirectas, ya que al reducirse los ingresos de los exportadores y productores éstos se veían imposibilitados de seguir prácticas ambientalmente positivas. La mejora del nivel de ingresos de los países en desarrollo era, citando la misma publicación de la OCDE, "una importante condición previa para invertir en las reglamentaciones ambientales necesarias, así como para un apoyo más amplio en favor de las mejoras de la calidad del medio ambiente".

8. El representante de la Argentina no pretendía decir que mejorar el ingreso de los productores agrícolas, por ejemplo los radicados en países en desarrollo, fuera una condición suficiente para garantizar mejores prácticas ambientales. En síntesis, no bastaba con repetir simplemente que no había contradicción entre el comercio internacional y el medio ambiente. Esa era una verdad a medias. Tampoco podría decir el Subcomité que no estaba dispuesto a aceptar medidas ambientales que distorsionaran el comercio internacional sin aceptar paralelamente la eliminación de las distorsiones ambientales transmitidas por medio del comercio internacional. Si se quería abordar seriamente la relación entre el comercio y el medio ambiente, el primer paso lógico, evidente e indispensable era determinar y acordar un marco para eliminar las subvenciones que tuvieran consecuencias ambientales negativas en el proceso de producción de los productos básicos. El orador no se refería a los efectos distorsionantes que las subvenciones podían tener en el comercio internacional: ese aspecto había sido abordado, con éxito limitado, en el marco de la Ronda Uruguay. Se estaba refiriendo a los beneficios ambientales que se derivarían de la eliminación de ese tipo de distorsiones al comercio. Ésta era la perspectiva que ocupaba al Subcomité.

9. Al presentar el problema en estos términos no se desconocían las dificultades que planteaba la superación de las políticas de subvención y de limitación del acceso a los mercados de los países que las aplicaban. Tampoco se desconocía lo que ya se estaba haciendo en materia de detracción de tierras y de corrección de múltiples mecanismos de protección agrícola. Se señalaba simplemente que por esa vía no sólo se había distorsionado y se seguía distorsionando el comercio mundial de productos agropecuarios, sino que también se estaba destruyendo el medio ambiente de los países que practicaban esa política y que desde allí se expandían efectos negativos para el medio ambiente de otros países. Es decir, a las buenas razones comerciales se añadían buenas razones ambientales para redoblar los esfuerzos por superar tales políticas.

10. El representante de Australia estimaba que este punto del programa obligaba a reflexionar sobre la contribución positiva que el sistema multilateral de comercio podría aportar al objetivo del desarrollo sostenible. Así se indicaba claramente en la segunda parte de su título, conforme a la cual correspondía examinar "los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales". La contribución positiva al desarrollo sostenible no era menos importante en relación con la primera parte del título, referente a "el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados". Este punto del programa de trabajo recordaba que el estudio de las vinculaciones entre las medidas comerciales y ambientales debía partir del reconocimiento de los beneficios que podían resultar tanto de la política comercial como de la política ambiental para el fomento del desarrollo sostenible. Este reconocimiento apuntalaba el objetivo de que las medidas comerciales y ambientales se apoyaran recíprocamente, lo que estaba destacado en el mandato del Comité. El problema consistía en determinar la contribución que podría efectuar el sistema de comercio multilateral para poner en práctica tal objetivo.

11. No debía subestimarse la complejidad de ese objetivo. Las medidas de protección del medio ambiente que restringían el acceso a los mercados y reducían las oportunidades comerciales de terceros países, en especial los países en desarrollo, en última instancia podían aportar muy poco al fomento del desarrollo sostenible, y aun al logro de mejores resultados ambientales a nivel mundial. Así podía ocurrir si las restricciones impuestas al comercio eran desproporcionadas con el objetivo ambiental que se perseguía, y la restricción al comercio repercutía negativamente en las oportunidades de desarrollo de terceros países. Debían apreciarse como contribuciones positivas a la promoción del desarrollo sostenible las medidas de cooperación internacional destinadas a reducir al mínimo las posibilidades de que las medidas de protección del medio ambiente tuviesen efectos no deseados, superfluos o injustificados. Tanto el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio como el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias tenían una importante función que cumplir a este respecto.

12. En lo relativo al segundo aspecto de este punto del programa de trabajo, era notorio que numerosas distorsiones comerciales y obstáculos al acceso a los mercados tenían consecuencias directamente negativas para el medio ambiente. Así ocurría claramente respecto de la agricultura y los productos obtenidos de la explotación de recursos naturales. Las señales de precios distorsionadas a los agricultores de los grandes países industrializados no sólo habían dado lugar a mayores niveles de producción antieconómica que habían perjudicado a los agricultores de otras regiones del mundo a través de la subvención de las exportaciones y los obstáculos restrictivos del acceso a los mercados: también habían impulsado prácticas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, existía una firme vinculación entre los altos niveles de subvención a la producción agropecuaria y el alto nivel de empleo de insumos que generaban problemas ambientales, como los plaguicidas y los fertilizantes químicos. Los niveles elevados de ayuda a la agricultura y el consiguiente aumento de la producción agropecuaria también habían intensificado la producción de materiales desperdiciados al mismo tiempo que impulsaban la expansión de la producción agrícola invadiendo zonas ecológicamente vulnerables. Los altos niveles de ayuda a la agricultura en los principales países industrializados habían puesto de relieve que los precios de los insumos y los productos en los mercados de productos agropecuarios muchas veces no correspondían a los costos ambientales de la producción agrícola. En realidad, tanto los consumidores como los contribuyentes habían sido afectados doblemente al tener que cargar con el costo de la ayuda a la agricultura y con los costos ambientales derivados de ella.

13. También era importante reflexionar sobre las relaciones entre la distorsión de los mercados agrícolas mundiales, con baja de los precios y restricción de las oportunidades de acceso a los mercados, y las menores oportunidades económicas en los países de producción agrícola eficiente. Debía observarse también la importante vinculación entre la baja de los precios mundiales y la disminución de los ingresos de los agricultores y la pobreza rural en muchos países, así como la estrecha vinculación entre la pobreza

rural y el deterioro del medio ambiente. La pérdida de ingresos en el medio rural significaba que los agricultores que tenían que hacer frente al deterioro de la tierra y otros problemas ambientales tenían escasos recursos para financiar obras de recuperación o el gasto derivado de prácticas agrícolas más sostenibles. El Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay representaba un primer paso importante hacia una economía política de la agricultura mundial más racional y justa, tanto desde el punto de vista comercial como con la perspectiva del medio ambiente. Pero las principales distorsiones comerciales subsistirían, y el Acuerdo de la Ronda Uruguay ofrecía un amplio margen para llevar a la práctica la contribución que la liberalización del comercio de productos agropecuarios podía aportar al desarrollo sostenible.

14. También podrían tener efectos beneficiosos para el medio ambiente nuevas reformas en otros sectores del sistema multilateral de comercio. Si bien la disminución de las distorsiones comerciales respecto de la agricultura sería directamente beneficiosa para el medio ambiente, en muchas otras esferas los efectos serían indirectos pero no dejarían por ello de ser importantes. La liberalización de las condiciones de comercio de los productos obtenidos de la explotación de recursos naturales podría ayudar a los países en su esfuerzo por impulsar la gestión sostenible de esos recursos e internalizar los costos ambientales de su utilización. Asimismo, una menor progresividad arancelaria para los productos elaborados y la mejora de las oportunidades comerciales respecto de diversos productos industriales podría ayudar a los países que trataban de diversificar su economía y atenuar su dependencia respecto de productos básicos que afectaban al medio ambiente. La medida en que los países participantes en el sistema multilateral de comercio colaborasen para reducir al mínimo los efectos injustificados de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados y respondiesen seriamente a la necesidad de eliminar los obstáculos y distorsiones comerciales representaría una importante comprobación de su empeño por encontrar soluciones equitativas y de cooperación para los objetivos ambientales y del desarrollo sostenible.

15. La representante de los Estados Unidos, en un comentario preliminar, estimó que el acceso a los mercados constituía un tema central presente en la mayor parte de los trabajos del Subcomité, incluidos los dos puntos del programa de trabajo que hasta el momento había tratado. Consideró que el acceso a los mercados tenía dos aspectos particulares que debían abordarse en relación con este punto: los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y por otro lado los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales.

16. La teoría económica sostenía que la liberalización del comercio daba lugar a un aumento de la eficiencia y un mejor nivel de vida. De ello, a su vez, cabía esperar beneficios para el medio ambiente: en primer lugar a través de la utilización más eficiente de los recursos limitados; en segundo término, los elementos de juicio indicaban que al aumentar los ingresos per cápita los países quedaban en mejores condiciones y en mejor disposición para destinar recursos a la lucha contra la contaminación. Por otro lado, el comercio por sí mismo no siempre tenía efectos favorables para el medio ambiente. Mucho dependía del contexto en que se produjese la liberalización del comercio. Sin una adecuada atención al aprovechamiento de los recursos limitados, la intensificación del comercio podía dar lugar a la acentuación de problemas ya existentes de sobreexplotación y desarrollo insostenible. La eficacia del comercio para beneficiar al medio ambiente, o para perjudicarlo, dependía de factores como la previsión de los posibles efectos y las medidas que se tomaran para responder a ellos o atenuarlos. Dependía de la forma en que se impulsara la liberalización y de que se la promoviera eficazmente.

17. La Ronda Uruguay había representado una contribución importante y ampliamente reconocida a la liberalización del comercio y el acceso a los mercados. Debía dar lugar a importantes beneficios económicos para los países desarrollados y los países en desarrollo, que representarían un aporte positivo desde el punto de vista del medio ambiente. Los análisis de la delegación de los Estados Unidos acerca de la Ronda, en los planos económico y ecológico, y el compromiso de abordar los problemas del

medio ambiente en este Subcomité indicaban que había fundamentos para el optimismo. Pero no obstante los progresos alcanzados, subsistían motivos de inquietud. Por ejemplo, las estructuras arancelarias que mostraban progresividad podían impulsar la producción ineficiente o una eficiencia sólo aparente. Este fenómeno despertaba especial preocupación en los sectores de los recursos naturales, que a su vez interesaban en particular, aunque no exclusivamente, a los países en desarrollo. Un ejemplo concreto de preocupación persistente era el relativo a los productos de la madera. Aunque en la Ronda Uruguay se estuvo cerca de un acuerdo de supresión de los aranceles en ese sector, tales esfuerzos finalmente se vieron frustrados. En definitiva, las tasas efectivas de protección arancelaria seguían próximas al 30 por ciento. Tal hecho resultaba sumamente decepcionante, y entre las razones de ello no era nada desdeñable la pérdida de valor de los recursos forestales y el obstáculo a los esfuerzos por invertir en una gestión sostenible de esos recursos.

18. En consecuencia, la liberalización del comercio era necesaria pero no suficiente para crear las condiciones de un desarrollo sostenible. Su grado de eficacia dependía de que, al desarrollarse el sistema multilateral de comercio, se asegurase la debida consideración de los factores medioambientales en la promoción del crecimiento y el desarrollo. La oradora señaló que los efectos de los costos originados por el cumplimiento de requisitos ambientales eran relativamente pequeños en comparación con otros factores de la producción. Por otra parte, aunque tales costos efectivamente existían, y en algunos casos podían significar desembolsos de inversión considerables, a largo plazo algunos de ellos podían producir no sólo beneficios para el medio ambiente sino también beneficios económicos, sobre todo cuando las normas impulsaban procesos más eficientes. Se estaba realizando en otros ámbitos una importante labor de análisis sobre este tema, que debería tenerse en cuenta en el curso de los trabajos.

19. Además, las eventuales consecuencias negativas de las medidas de protección del medio ambiente podrían atenuarse con medidas positivas. Tanto el sistema multilateral de comercio como la red cada vez más amplia de los AMUMA reconocían esta importante necesidad a través de disposiciones específicamente destinadas a contemplar la situación especial de los países en desarrollo. Un aspecto decisivo que se destacaba en todos los trabajos de análisis al respecto era la efectiva transparencia. Esto se refería no sólo a la difusión de informaciones *a posteriori*, sino también a la participación efectiva de todos los protagonistas interesados a lo largo del proceso de desarrollo de las medidas de protección del medio ambiente.

20. En conclusión, la oradora resumió cuatro cuestiones principales: el acceso a los mercados era un tema que alcanzaba a la mayor parte de los trabajos del Subcomité; globalmente, las medidas de protección del medio ambiente no parecían haber tenido hasta el momento efectos negativos importantes en el acceso a los mercados, incluso en relación con los países en desarrollo, pero ciertos aspectos que suscitaban preocupaciones debían ser examinados en forma cuidadosa y equilibrada; la liberalización del comercio era un componente necesario del desarrollo, que a su vez podía contribuir eficazmente al desarrollo sostenible si se creaban las condiciones adecuadas, y era tarea del Subcomité ayudar a asegurarlo; y se habían logrado progresos, especialmente a través de la Ronda Uruguay, pero en medida desigual.

21. El representante de Venezuela dijo que el tema en examen era de naturaleza amplia y ofrecía la oportunidad de referirse a la gama de medidas que podían aplicarse para cumplir objetivos ambientales y a sus efectos sobre el acceso a los mercados. Desde una perspectiva general, esta materia abarcaba las medidas de reglamentación como los requisitos sobre etiquetado, embalaje y empaquetado, así como las normas técnicas aplicables a productos o a procesos y métodos de producción (PMP). También podía comprender el tema de los incentivos de tipo económico destinados a incorporar los costos ambientales. En primera instancia convenía reiterar que las medidas ambientales debían aplicarse en conformidad con los principios de no discriminación contenidos en la normativa del sistema multilateral de comercio, según la naturaleza transfronteriza o interna del daño ambiental que se intentase remediar o prevenir. Asimismo cabría destacar los incentivos necesarios para las exportaciones de productos

nocivos para el medio ambiente de países en desarrollo, y el tema del reconocimiento mutuo o la armonización de normas ambientales. Esas materias eran objeto de análisis detallados en el programa de trabajo del Subcomité e incidían en el acceso a los mercados de exportación de los países en desarrollo.

22. El orador se refirió en especial a la segunda parte del tema, es decir, los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de restricciones y distorsiones comerciales. Su delegación estimaba que la eliminación de distorsiones y restricciones comerciales podía tener efectos positivos sobre la conservación del medio ambiente, por la razón fundamental de la adjudicación racional y eficiente de los recursos de la producción. Ello no significaba que el grado de apertura de una economía, o su proyección hacia el comercio internacional, fuesen determinantes de políticas ambientalmente más sanas, porque éstas debían ponerse en práctica en forma paralela. El beneficio ambiental de la eliminación de distorsiones al comercio internacional se verificaba a niveles nacionales cuando, en ausencia de mecanismos de apoyo de precios o de subvenciones a la producción, se reducía el daño ambiental provocado por la utilización intensiva de esos recursos de producción y se incentivaba la producción de bienes sustitutivos y la utilización de tecnologías ambientalmente más eficientes. En el caso de la agricultura ello se traduciría, por ejemplo, en una menor utilización de fertilizantes y plaguicidas. Esos mismos efectos se multiplicaban en los países que competían en los mercados internacionales de productos agrícolas altamente subvencionados.

23. Este tipo de intervención gubernamental en los mercados influía sobre las pautas globales de producción en perjuicio del desarrollo sostenible de las sociedades al adjudicar un valor superior a la producción que a la conservación del medio ambiente. La guerra de subvenciones que se comprobaba en los mercados internacionales de ciertos productos agrícolas no solamente afectaba adversamente a los países que no tenían la misma capacidad de subvencionar sus exportaciones, sino que desviaba una importante cantidad de recursos que podrían adjudicarse a otras actividades que mejorarían la capacidad de absorción de los procesos de internalización de costos ambientales. Los países importadores de productos agrícolas subvencionados también se veían afectados por esta situación desde el punto de vista ambiental. Paradójicamente, en esos países que tenderían a beneficiarse de los precios bajos de sus importaciones subvencionadas se producía un desplazamiento del consumo de los productos sustitutivos nacionales hacia el producto importado. Ello tenía efectos negativos sobre la economía y la generación de riqueza. Las comprobaciones empíricas demostraban que a medida que crecía la renta de los países disminuían los niveles de contaminación per cápita. Los efectos económicos y sociales adversos que se producían en los países importadores reducían su capacidad de aplicar medidas de conservación del medio ambiente.

24. La actuación gubernamental debería orientarse de preferencia a los instrumentos económicos que incentivaran la reducción de la contaminación por parte de los agentes en el mercado. Sobre este tema se habían efectuado intervenciones muy explícitas en las deliberaciones del Subcomité. En la política ambiental, la asistencia oficial debía fortalecer el desarrollo de tecnologías menos contaminantes; y en el plano internacional debían vigorizarse los mecanismos de transferencia de recursos y de tecnologías hacia los países en desarrollo. Sin ello, los objetivos enunciados por la CNUMAD no podrían concretarse. Por esas razones, el tema de las distorsiones y restricciones comerciales debía evaluarse con interés en los esfuerzos del Subcomité y otros foros intergubernamentales para establecer una vinculación entre el comercio y el medio ambiente que llevara hacia el objetivo del desarrollo sostenible.

25. El representante de Egipto consideró que la integración de los objetivos de liberalización del comercio con la idea del desarrollo sostenible constituía uno de los problemas mayores y más complejos que era preciso abordar. Un aspecto decisivo de tal esfuerzo era la elaboración de soluciones democráticas a nivel internacional para tomar las complejas decisiones políticas referentes al comercio y el medio ambiente. Sin embargo, la experiencia de los últimos años parecía indicar que la cuestión

del medio ambiente se utilizaba cada vez más como un obstáculo artificial para trabar el acceso de los países en desarrollo a los mercados de los países desarrollados. Muchos estudios sobre determinados países, elaborados por distintas organizaciones regionales e internacionales, señalaban que la cuestión de la protección del medio ambiente se utilizaba fundamentalmente para defender intereses comerciales en el plano internacional más que para lograr objetivos propiamente ecológicos. Las medidas unilaterales adoptadas por países desarrollados o por sus organizaciones de defensa de intereses particulares, que escogían sectores sujetos a medidas de protección de medio ambiente, parecían tener como objetivo principal la protección de intereses comerciales específicos. Si se mantenía tal tendencia, se verían frustrados y desalentados los esfuerzos que estaban realizando los países en desarrollo para lograr el ajuste económico y ecológico.

26. Aun en casos en que las medidas ambientales no eran consecuencia directa de intereses comerciales, se utilizaba el comercio internacional para transferir normas ecológicas creadas en un contexto determinado para resolver problemas específicos en otros contextos cuyos problemas eran diferentes, y donde también podían ser distintas las prioridades y las opciones. Existía el peligro latente de que, cuando en los países desarrollados los creadores de contaminación y sus víctimas se pusiesen de acuerdo sobre medidas de protección del medio ambiente que suponían un aumento de los costos, la existencia de otros productores y exportadores en países en desarrollo ofreciera a los contaminadores y a sus víctimas una posibilidad de actuar concertadamente. Podían convenir en medidas de atenuación de la contaminación que aumentaban los costos y, al mismo tiempo y para proteger el mercado de los productores, iban acompañadas por medidas proteccionistas que excluían la competencia de productos importados y trasladaban los costos de protección ambiental a los exportadores de países en desarrollo. De este modo, existía un grave peligro de que la política de conservación del medio ambiente y el proteccionismo comercial fuesen de la mano.

27. La mejora de las oportunidades comerciales y del acceso a los mercados para los países en desarrollo era un requisito previo fundamental para abordar los problemas actuales y futuros del medio ambiente mundial. Los efectos de las medidas de protección del medio ambiente en el acceso a los mercados y las oportunidades comerciales para los países en desarrollo debían enfocarse con dos perspectivas: los efectos de las medidas de protección del medio ambiente adoptadas por los propios países en desarrollo sobre la competitividad de sus exportaciones, que eran uno de los factores decisivos de su capacidad de alcanzar los mercados de países desarrollados, y las consecuencias de la política medioambiental de los países desarrollados sobre las perspectivas comerciales de los países en desarrollo.

28. En cuanto a la primera cuestión, el grado en que el costo ambiental internalizado se pagase por el productor en los países en desarrollo o por el consumidor en los países desarrollados dependía sobre todo de la elasticidad de las curvas de la oferta y la demanda, así como de la capacidad de una y otra parte de modificar esas curvas. Era notorio que la mayor parte de las exportaciones de los países en desarrollo eran relativamente poco diferenciadas y, por ello, la curva de su demanda tendía a ser elástica. En cambio, la curva de la oferta era más bien rígida, ya fuese por la necesidad perentoria de obtener divisas o por las condiciones en que se efectuaban las exportaciones. En síntesis, habida cuenta de las características de las curvas de la oferta y la demanda, todas las medidas tendientes a internalizar los costos medioambientales de las exportaciones de los países en desarrollo tenderían a gravar principalmente los productos y a los exportadores de países en desarrollo. Añadió el orador que una parte considerable de los intercambios mundiales estaban dominados por operaciones intraempresariales que se efectuaban a precios de transferencia destinados a concentrar los beneficios en los lugares que más convinieran a la empresa. Ese lugar a menudo no era el país exportador, si éste era un país en desarrollo. Cabría pensar en este caso que los costos internalizados a través de las medidas de protección del medio ambiente podrían internalizarse en otro lugar sin afectar negativamente, por lo menos, el precio recibido por el país productor. También a este respecto sería interesante reflexionar sobre los efectos de las prácticas comerciales restrictivas en la internalización de los costos medioambientales.

29. En cuanto a las posibilidades de ambas partes, es decir, los productores de países en desarrollo y los consumidores de países desarrollados, de modificar las curvas de la oferta y la demanda para determinar quién pagaba efectivamente las externalidades internalizadas, dependían de múltiples factores que no podrían abordarse de modo concluyente en esta deliberación. Por ejemplo, el factor tecnológico resultaba decisivo a ese respecto. Las empresas privadas de países desarrollados estaban creando nuevas tecnologías, algunas de ellas inocuas para el medio ambiente, que en general constituían objeto de propiedad intelectual privada y sustituían tecnologías de dominio público haciendo aumentar los ingresos de los países desarrollados cuyas empresas poseían las patentes. Si la nueva tecnología imponía normas establecidas unilateralmente sin tener en cuenta otros aspectos, en particular un mecanismo de financiación, el resultado neto sería de saldo desfavorable para los países en desarrollo, sobre todo para las pequeñas empresas de los sectores pobres de esos países. Esto agravaría la situación de pobreza y actuaría en contra del desarrollo sostenible.

30. Si el poder de modificar la curva de la oferta se concentraba en las empresas, las instituciones y los gobiernos que disponían de los medios necesarios para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, el poder de influir en la curva de la demanda quedaría en gran medida en manos de los medios de difusión y, por consiguiente, de quienes tenían acceso a ellos, en particular los grupos de presión bien organizados. Todas esas estructuras de poder tendían a concentrarse en países desarrollados. En síntesis, teniendo en cuenta las posibilidades de los países en desarrollo y de los países desarrollados de influir en las condiciones de la oferta y la demanda, a través de los precios o de otros factores, el comercio de los países en desarrollo tendería a resultar perjudicado por las medidas de protección del medio ambiente.

31. Con respecto a la segunda cuestión, el efecto de las medidas ambientales de los países desarrollados sobre las perspectivas de comercio de los países en desarrollo, algunos estudios empíricos realizados por organizaciones internacionales demostraban que cuando los países en desarrollo tenían que ajustar sus procesos de producción a nuevos requisitos ambientales de países desarrollados, recaía una carga más pesada en los primeros y el efecto era particularmente grave para los pequeños productores de los países en desarrollo. Tales comprobaciones eran lógicas porque los exportadores en pequeña escala de los países en desarrollo competían en el mercado internacional sobre la base de los precios más que de otros factores como los aspectos ambientales. Por lo tanto, cuando el aspecto ecológico formaba parte de la calidad general de un producto, difícilmente podrían obtener ventajas en los precios por haber mejorado su producción desde el punto de vista ambiental.

32. Esos estudios sobre determinados países ponían de manifiesto tres categorías importantes de costos: los costos de transacción, porque las reglamentaciones vigentes en los distintos mercados podían tener diferencias considerables; los costos derivados de medidas ambientales aplicadas a los productos, que podían acentuarse e intensificarse con otros riesgos vinculados con la exportación, actuando como obstáculo en el acceso a los mercados; y los costos fijos derivados de modificaciones de diseño o del proceso de producción, que podían aumentar creando especiales dificultades para los países en desarrollo debido a los elevados costos de opción del capital. El orador concluyó señalando que para alcanzar un crecimiento sostenible a nivel mundial era preciso abordar las dificultades y los problemas a fin de encontrar el mejor modo de resolverlos.

33. El representante de Nigeria señaló tres conclusiones que surgían de las exposiciones realizadas y de los estudios que se estaban elaborando sobre el tema. Una de ellas era que las medidas ambientales no habían tenido efectos negativos importantes en el comercio y el acceso a los mercados; la segunda era que las medidas ambientales tendrían efectos desfavorables en el sistema de comercio, sobre todo para los países en desarrollo; y, en tercer término, que los resultados eran inciertos. El orador estimó que era importante tener en cuenta las premisas en que se basaban esos estudios. Se refirió a las cuestiones de los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, sobre todo para los países en desarrollo, y de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las

restricciones y distorsiones comerciales. Los vínculos entre las medidas ambientales y el acceso a los mercados eran complejos e inciertos por múltiples razones, y requerían un estudio más completo. En primer lugar, los países partían de supuestos diferentes sobre los tipos de medidas ambientales que se aplicarían o deberían aplicarse. Por ejemplo, había incertidumbre y controversia sobre si se aplicarían o deberían aplicarse normas armonizadas o bien los países actuarían sobre la base de normas nacionales fijadas según sus propios objetivos y prioridades. En segundo término, se planteaban interrogantes sobre si la evolución de las medidas ambientales debería referirse a los productos o a los procesos, o a una combinación de unos y otros. En tercer lugar, había diferencias importantes y todavía no resueltas sobre los tipos de métodos que deberían regir la aplicación de las medidas ambientales. La polémica sobre los enfoques *ex-ante* y *ex-post* ponía de manifiesto esas diferencias, aunque la delegación del orador consideraba que no se trataba de criterios excluyentes y existía entre los dos un campo transitable.

34. Las medidas ambientales eran diversas y su lista iba en aumento, incluyendo instrumentos como las subvenciones, los permisos negociables, los regímenes de licencias, los gravámenes por contaminación, los acuerdos libremente concertados por las empresas de una rama de actividad, las disposiciones sobre responsabilidad, la divulgación de informaciones sobre los efectos ambientales, etc. La diversidad de los instrumentos creados hacía difícil llegar a un consenso sobre los tipos de medidas que debían estudiarse en relación con este punto. El acceso a los mercados era una variable más operacional; aunque estaba sujeto a factores comerciales y no comerciales, era fácil determinar en qué casos se lo restringía o se lo facilitaba. Por otra parte, el acceso a los mercados era un tema de alcance general que debía incorporarse en el examen de otras vinculaciones entre el comercio y el medio ambiente a medida que se estudiaran todos los temas encomendados al Subcomité.

35. Los estudios sobre los efectos de las "medidas verdes" sobre el comercio, en especial en el acceso a los mercados, también se veían trabados por la falta de pruebas firmes de esos efectos. Por lo tanto, sería útil contar con estudios que permitiesen la constitución de una base de datos y que presentaran resultados cuantificables sobre los efectos de determinadas medidas ambientales, ya se aplicaran a los productos o a los procesos, en el acceso de determinados productos a los mercados. El orador propuso que se efectuaran estudios empíricos y técnicos sobre determinadas categorías de productos convenidas por los miembros del Subcomité; por ejemplo, su delegación desearía que se realizaran estudios sobre los productos tropicales y agropecuarios. A otras delegaciones podrían interesarles tales estudios acerca de los automóviles, las plantas industriales, etc. Era fácil comprender las razones por las que no se contaba todavía con datos; muchos AMUMA apenas habían entrado en vigor o sólo habían estado en vigor durante breves períodos. A falta de bases de datos y estudios que permitiesen un análisis más detallado y preciso de los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, su delegación presentaría algunas observaciones preliminares y generales.

36. Las medidas ambientales se formulaban para alcanzar normas referentes a los procesos o a los productos. Tenían efectos comerciales, particularmente en el acceso a los mercados, como los costos de cumplimiento de las normas, los efectos sobre la competitividad, las oportunidades comerciales y la influencia sobre las preferencias de los consumidores, que tendían a repercutir en la demanda de los productos. En la actualidad, las normas ambientales no estaban armonizadas ni eran uniformes en los distintos países. Por consiguiente, las normas ambientales más exigentes establecidas en un país y aplicadas a través de medidas cada vez más estrictas impondrían un costo más elevado a los productores y exportadores extranjeros para que pudiesen ajustarse a las reglamentaciones internas del país importador. Aumentarían desde luego los costos de transacción y los costos de cumplimiento de las normas. Así, si se adoptaban normas cada vez más estrictas y los costos no se internalizaban, los probables efectos comerciales derivados de ellas consistirían en la anulación de las diferencias de costo relativo entre las naciones, que representaban la base de los beneficios del comercio. Los mayores costos reducirían las ventajas competitivas del productor extranjero, suponiendo que la calidad de los productos fuese igual o comparable y que los productos fueran sustituibles. Por otra parte, cabía concebir

que el costo adicional a cargo del productor extranjero fuese en realidad mayor si determinado mercado de exportación sólo absorbía una pequeña parte de las ventas de ese productor, en cuyo caso no podría beneficiarse de economías de escala. De este modo, la aplicación de normas más exigentes por algunos, en condiciones en que las normas variaran ampliamente, podría inhibir el comercio.

37. Los consumidores se veían enfrentados cada vez más frecuentemente con "opciones verdes". Este cambio de orientación de las opciones podría provocar alteraciones de la demanda, como la intensificación de la demanda de productos "inocuos para el medio ambiente". Los países que pudiesen aprovechar las oportunidades comerciales así surgidas podrían ampliar sus posibilidades de colocación. Pero también sería razonable pensar que las oportunidades comerciales que surgieran dependerían de los costos. Si hacía falta un proceso de ajuste importante para pasar de productos perjudiciales para el medio ambiente a otros inocuos para él, la base del comercio dependería de los costos de tal ajuste y de que se mantuvieran las diferencias relativas de costo entre los productos que originaban los beneficios del comercio. Los países en desarrollo podrían salir favorecidos si las preferencias de los consumidores, traducidas en demanda agregada, daban lugar a la sustitución de productos químicos o sintéticos por productos naturales y otros análogos debido a su inocuidad para el medio ambiente.

38. En cuanto al segundo aspecto de este punto, es decir, los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales, su delegación consideraba que las causas y los efectos eran más directos. Las restricciones y distorsiones comerciales, como las subvenciones en el sector de los productos agropecuarios y tropicales, habían tenido efectos ambientales desastrosos en muchos países. Los países de África presentaban ejemplos trágicos. La eliminación de esas distorsiones haría posible que se manifestaran los precios de mercado, que aumentarían los ingresos de los países productores y que se frenara la explotación de recursos limitados, favoreciéndose la preservación del medio ambiente. La baja de los precios mundiales de los productos básicos causaba graves problemas para el medio ambiente de África y se debía en gran medida, aunque no exclusivamente, a distorsiones comerciales, sobre todo subvenciones en los países consumidores.

39. Las cifras del comercio de África correspondientes a un período de diez años mostraban con claridad la repercusión de la baja de los precios de productos básicos en la participación de África en el comercio mundial. El orador consideraba esas cifras asombrosas: en 1982, la participación de África en el comercio mundial, sin incluir a Sudáfrica, había sido del 4,25 por ciento; en 1992, del 1,88 por ciento, con una tasa de crecimiento anual de -0,19 por ciento. Las distorsiones y restricciones comerciales no explicaban por sí solas esta nefasta evolución comercial pero sí explicaban, en gran medida, los pobres resultados de la exportación habida cuenta de que los ingresos derivados de la exportación de productos básicos habían disminuido en contraste con el aumento de su volumen.

40. Las consecuencias ambientales habían sido graves y seguían siéndolo. Los recursos se explotaban a un ritmo alarmante, con el efecto de un agotamiento acelerado. Se estaban acentuando la deforestación y desertificación, así como otros múltiples problemas ambientales graves. Esos problemas no serían de tal magnitud en muchos de los países de África si hubiesen obtenido precios de mercado justos para sus productos de exportación. En la CNUMAD se había establecido un consenso que se iba fortaleciendo día tras día en el sentido de que las políticas sobre comercio internacional y las políticas ambientales debían apoyarse mutuamente para promover el objetivo del desarrollo sostenible. El comercio era un medio de aumentar los ingresos, la riqueza y la prosperidad de los países. De ese modo se destinarían recursos indispensables para la protección y conservación del medio ambiente. Si se conservaba el medio ambiente y se utilizaban prudentemente los recursos, se seguiría contando con nuevos recursos para la expansión del comercio. Para que el medio ambiente pudiera seguir suministrando las bases de la expansión del comercio, los precios de los bienes y productos debían corresponder al costo social íntegro de la protección del medio ambiente. Si los precios correspondían a ese costo social íntegro, el comercio seguiría contribuyendo al crecimiento sostenible.

41. El problema, sin embargo, consistía en que las medidas urgentes para la aplicación de este valioso consenso se veían amenazadas por muy diversas dificultades que se multiplicaban. Por ejemplo, las medidas unilaterales para imponer normas ambientales en una esfera considerada primordialmente como un ámbito de cooperación multilateral suscitaban las sospechas y el escándalo de muchos. Existían inquietudes por el empleo de sanciones comerciales para la aplicación de los AMUMA. Había enérgicos planteos en el sentido de que ciertos grupos de presión podrían tomar bajo su control y colonizar las fundadas inquietudes de los sectores ecologistas con fines de proteccionismo. Por consiguiente, su delegación consideraba que hacían falta conclusiones científicas y objetivas sobre la eficacia y la necesidad de las normas ambientales que tuvieran efectos comerciales, para excluir la posibilidad de un proteccionismo encubierto.

42. Por último, el orador ofreció ciertas ideas sobre la mejor forma de abordar la solución de algunos de los problemas en debate. En primer lugar, el Subcomité no era un ámbito destinado a la fijación de reglas y normas sobre el medio ambiente. Mediante las deliberaciones, el estudio y el análisis, el Subcomité debía determinar las formas más convenientes y adecuadas de promover los objetivos del desarrollo sostenible y debía asegurar que cualquier medida que se adoptase o se contemplase adoptar fuera compatible con el GATT. Los principios rectores seguían siendo la no discriminación, la transparencia y la salvaguardia y el fortalecimiento de los principios del sistema multilateral de comercio mediante la actuación concertada.

43. El representante del Brasil consideró que el punto en discusión derivaba principalmente de las deliberaciones sobre el seguimiento de la CNUMAD que tuvieron lugar el año anterior en el CCD. Esas deliberaciones deberían reactivarse, y la intervención de la delegación del Brasil se basaba en gran medida en su participación en ese proceso. Las partes del Programa 21 que habían sido asignadas para su examen a ese Comité, es decir, el capítulo 2, la Introducción y la sección A, contenían reiteradas exhortaciones a una ampliación del acceso a los mercados en favor de los países en desarrollo. En el Programa 21 se afirmaba que la expansión del comercio mediante la liberalización mejoraba las perspectivas de desarrollo al aumentar las exportaciones de los países en desarrollo. Los progresos logrados en la eficiencia de la distribución reducían la sobreexplotación y el desperdicio de recursos naturales. Existía, por lo tanto, una vinculación entre la protección del medio ambiente y el mantenimiento y la mejora de un sistema multilateral abierto de comercio. En realidad, "promover el desarrollo sostenible mediante la liberalización del comercio" era uno de los objetivos fijados para el seguimiento de la CNUMAD.

44. Desde este punto de vista, la aplicación sin distorsiones de la Ronda Uruguay, a cuya conclusión se había exhortado en el Programa 21, era un aporte básico que el sistema multilateral de comercio podía hacer al logro del desarrollo sostenible. Pero la discusión sobre el acceso a los mercados, derivada del Programa 21, no se limitaba a esta perspectiva general relativa a la liberalización. Un aspecto importante de la sección A del capítulo 2 era la mejora del comercio de productos básicos, tanto por su importancia decisiva para tantos países en desarrollo como por la directa relación existente entre la producción de productos básicos y el medio ambiente natural. No se trataba de un texto dirigido exclusivamente al GATT, y muchas de las cuestiones que incluía estaban siendo tratadas en otros ámbitos. Aun así, existían por lo menos tres cuestiones relacionadas con el GATT: el acceso, las distorsiones y la diversificación.

45. En materia de acceso a los mercados, además del problema de las medidas en las fronteras que, en términos generales, había sido objeto de negociaciones en la Ronda Uruguay, la delegación del Brasil había propuesto que se examinaran los impuestos internos que gravaban los productos tropicales. Como no existía producción nacional de tales productos en los países situados en zonas templadas, los altos impuestos internos que se les aplicaban, aunque formalmente estuvieran en conformidad con el artículo III del GATT, distorsionaban la competencia y equivalían a un arancel aplicado a las importaciones. Este problema había sido examinado en el pasado en el GATT sin que

se llegara a resultados significativos y debería ser reexaminado a la luz de los resultados de la Conferencia de Río. La delegación del Brasil consideraba que el primer paso para ello consistía en verificar en qué grado se había estudiado esta cuestión en el GATT en el pasado y si se había llegado a alguna conclusión. Con ese fin, el orador propuso que el Subcomité pidiese a la Secretaría que preparase un documento sobre el tema.

46. En materia de distorsiones, el mensaje de la CNUMAD era contrario a las subvenciones a la producción y la exportación en la agricultura. Esas subvenciones, al reducir los precios mundiales, provocaban una sobreexplotación general de los recursos en los países en desarrollo, necesitados de moneda fuerte. Las cuantiosas sumas destinadas a las subvenciones podían dedicarse a mejores fines, por ejemplo, en el apoyo a los programas de desarrollo sostenible de los países en desarrollo. La aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay en esta esfera tenía aspectos referentes al medio ambiente y al desarrollo, y los adelantos futuros de las disciplinas multilaterales en materia agrícola favorecerían la promoción del desarrollo sostenible.

47. En tercer lugar, las referencias del Programa 21 al problema de los productos básicos también exhortaban a apoyar los esfuerzos de diversificación. Era fácil comprender que al reducirse la dependencia respecto de un número limitado de productos básicos se contribuía a evitar la sobreexplotación impulsada por las bajas de los precios. La misma lógica valía en favor de la diversificación vertical, porque los productos más elaborados estaban menos expuestos a las oscilaciones de precios. Lamentablemente, la ampliación vertical de la producción chocaba con el obstáculo de la progresividad arancelaria en los principales mercados de exportación, cuya importancia se acentuaba por el pequeño volumen de los mercados de muchos países en desarrollo. También la progresividad arancelaria era un tema que había sido tratado en el GATT pero no sistemáticamente, incluso en la Ronda Uruguay, en la que se lo había considerado un objetivo en la cuestión del acceso a los mercados. También a este respecto, la delegación del orador propuso que la Secretaría preparase un documento relativo a los estudios efectuados en el pasado en el GATT sobre la cuestión y un análisis de las consecuencias del problema a la luz de las deliberaciones del Subcomité.

48. El tema del acceso a los mercados era una cuestión horizontal que estaba presente en todos los puntos del programa de trabajo. Esta evaluación hacía conveniente un instrumento horizontal para mejorar el conocimiento del tema y dar apoyo a las deliberaciones. En los trabajos del CCD se había discutido la idea de establecer una base de datos del GATT sobre medidas ambientales con efectos comerciales. El CCD había tenido oportunidad de conocer los esfuerzos de la UNCTAD para crear tal base de datos. La invitación formulada por el Presidente, para que se ofreciese información voluntariamente sobre las medidas ambientales examinadas por el Subcomité, se orientaba en la misma dirección. El orador propuso que se llevaran a cabo consultas oficiosas sobre la cuestión a fin de determinar las medidas necesarias y viables en materia de fiscalización y acopio de datos en esta materia en el ámbito de la OMC, teniendo en cuenta debidamente los trabajos realizados por otras organizaciones a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.

49. Durante las deliberaciones sobre el seguimiento de la CNUMAD desarrolladas en el GATT, la delegación del Brasil había destacado tres ideas básicas derivadas de la Conferencia de Río que seguían siendo válidas para este debate. En primer lugar, después de la CNUMAD debía tenerse presente la dimensión relativa al desarrollo en todo estudio de las relaciones entre el comercio y el medio ambiente. En segundo lugar, los progresos en las cuestiones relativas al medio ambiente y el desarrollo deberían basarse en la cooperación internacional. En tercer término era preciso abordar las causas profundas de los problemas ambientales, lo que suponía la necesidad de tratar los problemas relacionados con el desarrollo. Su delegación había tratado de señalar algunas esferas en que la actividad de la OMC podría tener efectos positivos sobre el desarrollo y el medio ambiente, sugiriendo algunas tareas iniciales para la Secretaría. La delegación del Brasil confiaba en que tales sugerencias serían bien recibidas por otras delegaciones y el Subcomité podría avanzar por ese camino.

50. El representante de Austria dijo que el análisis del Subcomité debía tomar en consideración adecuadamente que los eventuales efectos secundarios de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados podían ser una consecuencia o una necesidad del logro del objetivo ecológico de las medidas de protección del medio ambiente, y no correspondía ni deseárselos ni evitarlos. Por otra parte, aunque el análisis se concentrase en los efectos secundarios de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados, no debían olvidarse otros aspectos como la eficacia de la medida para la protección del medio ambiente, su estructura, su contenido y el objetivo ambiental perseguido; de lo contrario se obtendría un cuadro parcial e incompleto y se restringiría el alcance del análisis.

51. El principio 11 de la Declaración de Río disponía que "los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente". Los Estados efectivamente habían dictado leyes sobre el medio ambiente pero, para que fuesen eficaces, tenían que ser puestas en práctica y aplicadas adecuadamente. Existían razones para pensar que los Estados estaban adquiriendo mayor competencia en la elaboración de leyes sobre el medio ambiente y en su aplicación exitosa. Eran cada vez más las empresas que no sólo acataban las normas legales que se les imponían, sino que impulsaban ellas mismas el proceso de búsqueda y aplicación de soluciones novedosas para los problemas ecológicos. Los consumidores se mostraban cada vez más sensibles a los esfuerzos de los productores y prestaban atención a los efectos ambientales de los productos. Así ocurría con los productos pero también, y cada vez más, con los procesos de producción. Para las empresas, el no tener en cuenta consideraciones ambientales podía dar lugar a la pérdida de participación en los mercados y a la disminución de beneficios, mientras que tomándolos en consideración muchas veces obtenían ventajas competitivas.

52. De este modo, la creciente conciencia del público sobre los problemas ecológicos llevaba a numerosos productores a tener en cuenta esas inquietudes y a esforzarse por internalizar los costos ambientales. Al dar a los consumidores pruebas convincentes de esos esfuerzos, se les permitía tomar decisiones ecológicamente adecuadas en sus compras y se facilitaba la información sobre la calidad ecológica de los productos. En principio, esto no se limitaba a una sola economía nacional, sino que tenía validez general. Si los consumidores querían adquirir productos inocuos para el medio ambiente, su origen geográfico no sería el criterio más determinante de sus decisiones. Buscarían cierta calidad, cualesquiera que fuesen el productor y el país capaces de ofrecerla. Los productos de países en desarrollo podían ser más inocuos para el medio ambiente que los productos competidores provenientes de países desarrollados, debido a las materias primas incorporadas en esos productos o a que la explotación de recursos naturales que suponían era, o podía ser, menos intensiva.

53. Pasando del nivel macroeconómico al microeconómico de administración de las empresas, el orador señaló que una de las ramas importantes de la administración de empresas era la comercialización. Para lograr el éxito y la subsistencia a largo plazo, las empresas debían asegurarse de que sus productos tuviesen demanda. En otras palabras, tendrían que tratar de aumentar, mediante investigaciones de mercado, la probabilidad de que sus productos fuesen aceptados y adquiridos por los consumidores. A nivel macroeconómico, existía demanda de productos ecológicos por un lado y oferta concreta, o al menos potencial, por otro. De este modo, si los productores de países en desarrollo pudieran comunicar eficazmente las ventajas ecológicas de sus productos a los consumidores de países desarrollados, los primeros estarían igualmente en condiciones de beneficiarse de la preferencia de los consumidores por los "productos ecológicos" y a la vez de su disposición de reconocer los esfuerzos de los productores en favor del medio ambiente. Una vez puesto en marcha, el mecanismo de influencia recíproca entre los productores y los consumidores actuaría también entre los productores de países en desarrollo y los consumidores de países desarrollados. Por ello, al hablar de fomento de la capacidad debía tenerse presente la capacidad de comunicar informaciones de interés para determinados sectores, ya que constituía un aspecto fundamental de esa capacidad. La delegación del orador consideraba que el Centro de Comercio Internacional debería cumplir una importante función sentando las bases para la divulgación de las aptitudes necesarias, contribuyendo de ese modo a asegurar no sólo el acceso a los mercados, sino también la presencia real en ellos.

54. El orador pasó seguidamente del proceso de transmisión de las informaciones al contenido de esa información. Para que los consumidores pudiesen escoger entre los productos sobre la base de criterios ecológicos, era preciso que se les diese información digna de crédito sobre los aspectos de esos productos que afectaban al medio ambiente. Un medio apto para atender al mismo tiempo los intereses de los productores y de los consumidores podía ser la identificación clara de las normas aplicables a productos y procesos. Un primer paso podría consistir en normas mínimas convenidas internacionalmente que después pudieran desarrollarse sirviendo como base para el reconocimiento mutuo. Otro mecanismo podría consistir en sistemas de etiquetado basados en los productos o en los procesos. Las "mejores prácticas de gestión", definidas en relación con las condiciones locales, podrían reflejarse en normas sobre sistemas de etiquetado. La definición de las "mejores prácticas de gestión" tendría que adaptarse con el tiempo para tener en cuenta factores como las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos y la calidad y cantidad de la base de recursos.

55. El representante de Chile señaló que existían diversas formas en que las políticas de acceso a los mercados podían afectar negativamente al medio ambiente. A juicio de su delegación, el Subcomité no había prestado todavía la suficiente atención al efecto ambiental de las políticas proteccionistas que enfrentaban las exportaciones de muchos países en desarrollo. Esa situación tenía un doble efecto negativo. Por una parte, existían pruebas recientes de que las políticas comerciales proteccionistas en el sector agrícola no eran ambientalmente sostenibles, provocando daños en los sistemas ecológicos de los países productores. Por otra parte, las dificultades de acceso a los mercados mundiales que enfrentaban los productos agropecuarios de los países en desarrollo a consecuencia de esas políticas proteccionistas creaban grandes dificultades para alcanzar niveles de desarrollo económico requeridos para atender las necesidades de sus poblaciones y la protección ambiental.

56. El orador señaló que la Unión Europea tenía en trámite un nuevo acuerdo sobre el Sistema Generalizado de Preferencias que incluía requisitos ambientales y sociales, situación que constituía un precedente importante en la elaboración de acuerdos de esa naturaleza. Aunque la aplicación de condicionantes ambientales pudiera ser marginal en los intercambios de grandes volúmenes, causaba preocupación el principio de que las preferencias comerciales incluyesen requisitos ambientales. En cuanto a los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, el orador señaló que era cada vez más frecuente su aplicación a través de protocolos y acuerdos técnicos que podían incluir condiciones de tipo proteccionista que afectaban al comercio y que no habían sido negociadas en el convenio marco.

57. La delegación de Chile consideraba que la permanencia de los escalonamientos arancelarios, suavizados por las negociaciones de la Ronda Uruguay, también afectaba a la relación entre el acceso de los productos y la protección del medio ambiente porque afectaba principalmente al tipo de productos más relacionados con la variable ambiental, como los productos básicos de la agricultura, la silvicultura y la minería. La subsistencia de una estructura escalonada con políticas ambientales severas en los países desarrollados podía ser la mayor limitante para el desarrollo de esos sectores y la aplicación de un régimen económico basado en las ventajas comparativas. Finalmente, el orador indicó como elemento que debía tenerse en cuenta los obstáculos al comercio que podían constituir ciertos programas de etiquetado ecológico. La selección de ciertos criterios podía llevar a una discriminación contra los productores extranjeros, en razón de que los productores y consumidores locales prefiriesen características de los productos que fueran más fáciles de alcanzar por los productores locales.

58. El representante del Canadá consideró que el efecto de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados constituía un problema fundamental que abarcaba todos los puntos del programa de trabajo y que podía abordarse en todas las reuniones del Subcomité. Su delegación veía con agrado la oportunidad de centrar la discusión en las inquietudes de los países en desarrollo en esta materia. Tomó como punto de partida el reconocimiento de que el comercio era esencial para la creación de riqueza y, por consiguiente, para la protección del medio ambiente. Tal relación era especialmente importante para los países en desarrollo. El aumento de la renta nacional generado por el comercio

podría orientarse al mejor empleo y conservación de los recursos. El comercio y el desarrollo sostenible no constituían una dicotomía, y las afirmaciones en sentido contrario no contribuían al estudio de los problemas.

59. Otra consideración importante relativa al debate era la CNUMAD, cuya labor de seguimiento se estudiaba en el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional (MACI). Las cuestiones debatidas en la CNUMAD eran de aplicabilidad permanente, y el orador reiteró la importancia de los compromisos asumidos en Río. Su delegación seguía apoyando firmemente uno de los mensajes claves resultantes del proceso de la CNUMAD: la importancia de la cooperación y la asociación entre los países desarrollados y en desarrollo para tratar los problemas del medio ambiente y el desarrollo. Tal cosa significaba tomar en consideración la situación de los países en desarrollo al formular medidas nacionales de protección del medio ambiente. Desde luego, todos los países se veían enfrentados con dificultades para ajustarse a las nuevas realidades del comercio y el medio ambiente, pero esos ajustes podían ser especialmente onerosos para los países en desarrollo. Los oradores anteriores se habían referido a las deliberaciones del CCD, en las que se había iniciado un estudio sobre la forma de integrar las cuestiones relativas al comercio, el desarrollo y el medio ambiente. La labor iniciada en ese Comité había sido traída ahora al Subcomité.

60. El acceso de los países en desarrollo a los mercados constituía, a ese respecto, un tema prioritario. Ya habían tenido lugar algunas deliberaciones sobre si podrían realizarse nuevos trabajos, a partir de los adelantos logrados en la Ronda Uruguay, destinados a mejorar el acceso de los países en desarrollo a los mercados. Uno de los temas que debían examinarse era la progresividad arancelaria, y la delegación del orador apoyaba las propuestas formuladas acerca de un estudio de la Secretaría sobre el tema. Otro mecanismo para dar acceso especial a los productos de países en desarrollo era el Sistema Generalizado de Preferencias. Ese sistema había facilitado la expansión y la diversificación de sectores de exportación de los países en desarrollo. El orador señaló que su Gobierno estaba sometiendo a examen su plan general de preferencias con el fin de mejorar su eficacia en ese sentido. Numerosos países en desarrollo se beneficiaban también de otros regímenes arancelarios preferenciales de su país, como el Arancel Preferencial Británico, las preferencias otorgadas a los países en desarrollo del Commonwealth del Caribe y un arancel preferencial para los países menos adelantados.

61. El sexto punto del programa de trabajo se refería a los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados. Las normas comerciales en vigor permitían que los países impusieran normas internas exigentes de protección del medio ambiente siempre que se establecieran en forma compatible con las normas del GATT, incluyendo el trato nacional y el trato de la nación más favorecida. Pero las medidas ambientales podían afectar al acceso a los mercados y a la competitividad. Gran parte de los trabajos sobre este tema se había concentrado en la cuestión de la aplicación de normas o programas internos a los productos importados. Se habían determinado un cúmulo de cuestiones sobre la necesidad y la eficacia de la exigencia de que los productos importados se ajustaran a diversos tipos de criterios ambientales. Parecía existir amplio acuerdo en que los más problemáticos serían los referentes a los efectos de los métodos de producción o elaboración utilizados para la creación de un producto, en contraposición con los efectos del consumo o la eliminación del producto mismo. Esto último ya estaba abarcado por las normas del GATT, pero todavía podría dar lugar a efectos comerciales negativos que sería preciso abordar. En futuras reuniones tendría que centrarse la atención en esas cuestiones.

62. Otro tema de trabajo permanente sería el estudio de los medios a través de los cuales los países podrían cooperar y coordinar sus esfuerzos para el desarrollo y la aplicación de diversos tipos de normas y programas ambientales, incluyendo medidas como el etiquetado ecológico, los impuestos ecológicos, etc. Éstas no eran tareas correspondientes a la OMC, sino que debían realizarse en los foros competentes en materia de medio ambiente. No cabía duda de que en muchos casos las variadas condiciones de los países determinaban la conveniencia de normas y políticas diferentes. Tales diferencias

debían respetarse. Por otra parte, respecto de las propuestas de utilización de restricciones comerciales para imponer las normas de un país a otros, debía ponerse en tela de juicio la eficacia de tal método para la promoción del desarrollo sostenible. Las políticas y los programas no ajustados a las condiciones locales podrían causar más daños que beneficios desde el punto de vista ecológico.

63. En algunos casos, sin embargo, podría existir fundamento para el desarrollo de normas básicas internacionales que pudiesen emplearse para determinar un terreno común y una base para tratar de llegar a métodos como el reconocimiento mutuo o la equivalencia. Los esfuerzos orientados en esta dirección ya estaban encaminados en diversos ámbitos. Las autoridades internacionales de normalización debían tener en cuenta diversas consideraciones que incluían factores científicos, la situación y la capacidad propias de los países y los efectos ambientales, sociales y económicos de los distintos programas. Una vez más, se trataba de una labor no comprendida en la competencia del GATT/OMC, sino que correspondía a otros órganos que tenían mandatos en esas esferas.

64. En la OMC tendrían que desarrollarse diversas medidas para atenuar los eventuales efectos comerciales negativos de las políticas y programas ambientales. Tendrían que fijarse los parámetros de los tipos de medidas ambientales susceptibles de aplicarse a las importaciones. Otra medida consistiría en procurar una mejora de los requisitos del GATT en materia de transparencia. La transparencia no daba respuesta al problema de los PMP pero, respecto de las normas aplicables a los productos, podría asegurar que los países contaran con información oportuna y exacta y con una oportunidad útil para dar a conocer sus inquietudes. Ciertos estudios recientes de casos prácticos realizados por la UNCTAD llevaban a la conclusión de que el problema más importante al que debían hacer frente los exportadores de países en desarrollo era la falta de información suficiente y actualizada. A este respecto se había propuesto que los gobiernos estudiaran la posibilidad de ampliar la utilización de centros de información, como los creados en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Esos centros podrían suministrar informaciones sobre medidas ambientales relacionadas con el comercio, incluidas las que no estuvieran sujetas a requisitos formales de notificación por el régimen del GATT. El Subcomité tal vez deseara avanzar por ese camino, aunque sólo representaría una respuesta parcial.

65. La delegación del orador también consideraba importante reconocer que las normas convenidas internacionalmente podrían desempeñar una función positiva de promoción de los productos elaborados con criterio responsable desde el punto de vista ecológico, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, y que las normas ambientales podrían servir para impulsar la innovación tecnológica. En otras palabras, la aplicación de normas ambientales exigentes podría crear oportunidades de mercado. Era oportuno advertir que las nuevas tecnologías no significaban necesariamente una mejor calidad ecológica. Podía verse un ejemplo en los exportadores de café cuyos envases de yute natural eran menos aceptables que los de materiales plásticos porque no se contaba con medios de reciclado para el yute. Este problema, afortunadamente, había sido resuelto. El orador concluyó reconociendo los trabajos que se desarrollaban acerca de los efectos de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados en otras diversas organizaciones, entre ellas la UNCTAD y el PNUMA. Su delegación manifestó especial reconocimiento por los estudios prácticos preparados por la UNCTAD; esa labor estaba creando una base de informaciones que podría utilizarse en los trabajos del Subcomité.

66. El representante de la República Checa señaló que su delegación veía con agrado la atención que se prestaba en el GATT/OMC a las cuestiones del medio ambiente y la sostenibilidad. Su delegación seguía con interés el debate desarrollado que a su juicio se refería, como lo había reconocido la CNUMAD, a una de las esferas claves para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible a escala mundial. Su delegación sólo tomaba la palabra por primera vez en esta oportunidad por dos razones por lo menos: en primer lugar, los documentos de trabajo, los aerogramas de invitación y los informes llegaban a poder de su delegación en algunos casos muy tarde, haciéndole difícil movilizar sus limitados recursos para obtener la información que le permitiera intervenir en las deliberaciones de modo activo y constructivo; en segundo lugar, como país en proceso de transición y, probablemente, al igual que

otros países desarrollados y en desarrollo, tropezaba con algunas dificultades para determinar y precisar su propia posición y sus intereses en el marco del debate en curso sobre el comercio y el medio ambiente. Habida cuenta de la riqueza y las múltiples dimensiones del debate, existían muchos aspectos inciertos. Su delegación no sólo no podía estar segura de que la evolución más libre del comercio generaría automáticamente beneficios para el medio ambiente (aunque estaba firmemente convencida del efecto globalmente positivo de la liberalización comercial), sino que tampoco podía tener certeza de que si se procuraban honestamente normas ambientales más estrictas para restañar las heridas de un medio ambiente devastado y se firmaban tratados de protección del medio ambiente no se violarían normas vigentes en materia comercial.

67. Por último, su delegación no estaba nada segura de que los esfuerzos por mejorar el medio ambiente no perjudicarían la competitividad de los sectores industriales y de servicios que se estaban revitalizando en su país. De este modo, su delegación compartía la mayor parte de las inquietudes de los países desarrollados pero también oía con mucha comprensión los argumentos que exponían algunos países en desarrollo, sobre todo los que trataban de ampliar en su economía la influencia del mercado. Así, con respecto a las cuestiones del acceso a los mercados, que abarcaban otros puntos del programa de trabajo y eran la esencia del GATT/OMC, cabía afirmar que tendría que hacerse frente a incertidumbres importantes y duraderas. Su dilucidación podría comenzar tal vez aclarando la noción de "medidas ambientales" para después examinar y clasificar todos los tipos de medidas y políticas relacionadas con el medio ambiente y referentes a la exportación y la importación. El comercio siempre tenía dos caras, y el análisis no debería limitarse a una sola de ellas. El estudio de estas difíciles cuestiones se facilitaría enormemente con estudios prácticos y otros análisis profundos, como los realizados por el PNUMA y la UNCTAD.

68. El orador añadió que, más allá de los reglamentos relativos al medio ambiente notificados en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, expuestos en el documento PC/SCTE/W/1, existía una vasta zona de medidas que tenían o podían tener influencias en el comercio. Esa zona debería ser investigada y descrita de modo que, en el futuro, fuese posible indicar otros obstáculos al comercio (si se los encontraba) y establecer algunas directrices para distinguir mejor las medidas justificables de las que no lo eran. Uno de los primeros pasos podría consistir en difundir más informaciones sobre las medidas, políticas y normas nacionales de protección del medio ambiente, sobre todo las de probables efectos comerciales. Ello también podría formar parte de cualquier mecanismo destinado a evitar las controversias. El concepto de transparencia, aunque tal vez se lo invocara demasiado, seguía siendo una condición necesaria de cualquier nueva medida tendiente a lograr, como se deseaba, que la política en materia comercial y la política ambiental se apoyaran mutuamente.

69. La República Checa estaba promoviendo su ingreso en la OCDE con el objetivo de más largo plazo de incorporarse en la UE. Ello suponía esfuerzos de armonización en todas las esferas, incluido el medio ambiente. Su Gobierno estaba abordando esa tarea con seriedad, a pesar de que su economía en recuperación era todavía frágil y vulnerable ante los cambios de comportamiento de sus interlocutores comerciales. Su delegación también compartía las inquietudes de los países en desarrollo que procuraban ampliar sus oportunidades de mercado. Por lo tanto, también era sensible a los argumentos favorables a un criterio de prudencia y diferenciación en la armonización de las normas ambientales que tuviese en cuenta las diferentes condiciones y posibilidades de los países. Tal proceso requeriría tiempo, así como la cooperación y la asistencia internacionales (tanto bilaterales como multilaterales), el desarrollo de la capacidad y el cumplimiento de otras condiciones previas. Su delegación estaba dispuesta a trabajar cada vez más para promover la cooperación en esta esfera.

70. La representante del Uruguay apoyó las declaraciones de los representantes de la Argentina y Australia. El objeto del tema en examen tenía especial importancia para su Gobierno, en parte porque se lo consideraba en el contexto de las conclusiones de la CNUMAD. Como ya lo habían indicado otros oradores, el acceso a los mercados era una cuestión horizontal que también abarcaba otros aspectos

del programa de trabajo. Sin embargo, su delegación consideraba que el principal aspecto de este punto era el examen de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales, especialmente en el comercio de productos agropecuarios. A ese respecto, la oradora apoyó a las delegaciones que habían destacado que una de las tareas fundamentales del Subcomité era el examen de los efectos negativos para el medio ambiente de ciertas prácticas y políticas como el proteccionismo en la agricultura, y también examinar la forma en que esas restricciones del acceso a los mercados obstaculizaban los esfuerzos de desarrollo de algunos países en desarrollo. Esas políticas tenían un efecto doblemente negativo para el medio ambiente: daban lugar a la sobreexplotación de los recursos utilizados y, a través del comercio internacional, esa distorsión se transmitía a los productores de otros países obligándoles a la sobreexplotación de sus recursos llegando en algunos casos a resultados dramáticos como la desertificación.

71. Con respecto a las restricciones que afectaban al mercado de productos agropecuarios, la oradora añadió que los resultados de la Ronda Uruguay representaban un paso adelante en el contexto del concepto de desarrollo sostenible aprobado en la CNUMAD. Sin embargo, los gobiernos deberían ser más ambiciosos porque la liberalización del comercio era un aspecto fundamental del desarrollo y porque las restricciones que afectaban al acceso a los mercados, en particular de los productos agropecuarios, tenían efectos ambientales negativos. Concluyó que los resultados alcanzados en relación con este tema representarían un aspecto fundamental para evaluar globalmente la conclusión de todo el proceso. Su delegación evaluaría los resultados íntegros de la labor del Subcomité y del Comité, en la misma forma en que se había evaluado el programa de trabajo. Confiaba en que se lograrían adelantos en este tema con la misma rapidez que respecto de otros.

72. El representante de Corea convino en que el punto en examen comprendía múltiples cuestiones y resultaba difícil a esta altura mantener el debate centrado en un tema preciso. En consecuencia, formuló algunas observaciones preliminares. Ante todo, los posibles efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados habían dado lugar a muchas discusiones en diversos foros, como el Grupo MACI, así como en otras organizaciones internacionales. El orador consideraba que sería conveniente contar con una síntesis de los resultados de esas deliberaciones para facilitar la discusión práctica en el Subcomité. En segundo lugar, con respecto a los beneficios resultantes de la eliminación de restricciones y distorsiones comerciales, se manifestó de acuerdo en que la liberalización del comercio sería beneficiosa para el medio ambiente al promover una distribución eficiente de los recursos ambientales y económicos en el plano internacional, y también al mejorar el acceso a los mercados para los productos de exportación de los países en desarrollo.

73. Sin embargo, este supuesto se basaba en gran medida en razonamientos *a priori* y no en comprobaciones *a posteriori*. En realidad, existía muy poca experiencia sobre los efectos ambientales de la liberalización del comercio. De este modo, los órganos competentes estaban acopiando datos empíricos de estudios prácticos sobre determinados países o sectores. Algunos estudios preliminares efectuados por la OCDE mostraban a la vez factores positivos y negativos y señalaban la necesidad de proseguir los trabajos conceptuales y analíticos, incluyendo un estudio más detenido del alcance de los productos inocuos para el medio ambiente. A juicio del orador, para que la liberalización del comercio tuviese efectos positivos en el medio ambiente, era preciso que se aplicasen junto con la liberalización del comercio políticas ambientales eficaces de conformidad con la situación socioeconómica y ecológica de cada país.

74. El orador añadió que, como a esta altura parecía difícil un estudio centrado en este punto del programa, sería preciso volver a examinar el tema acotándolo más estrictamente después de que se hubieran tratado los demás puntos del programa de trabajo. Por último, se refirió a las cuestiones institucionales relacionadas con el tema. Las cuestiones relativas al acceso a los mercados se trataban en el CCD, y había cierta superposición entre los trabajos del CCD y los del Subcomité. Su delegación consideraba conveniente una adecuada coordinación entre ambos órganos.

75. El representante de Hong Kong consideró que el Subcomité debía tratar este punto partiendo de la base de que también era un tema que debía tratarse en el CCD. Sin embargo, correspondía al Subcomité determinar si los trabajos ya cumplidos podían proseguirse y operacionalizarse. El orador apoyó la idea de que el acceso a los mercados era una cuestión referente a múltiples temas y que formaba parte integrante de muchos de los puntos del programa de trabajo, aunque se lo tratara en éste específicamente. Convino con las delegaciones que habían destacado que la liberalización del comercio y el comercio mismo eran condiciones previas de la protección del medio ambiente, la creación de riqueza y la distribución efectiva y eficaz de los recursos, y que en ello estaba la base para los futuros trabajos en la materia. La intervención del representante de los Estados Unidos parecía poner en duda esa premisa. En tal caso, ello podía aplicarse a algunos casos aislados que podrían examinarse en particular.

76. El orador estimó que el representante de la Argentina había hecho una exposición útil de las cuestiones planteadas por este punto, sobre la base de los trabajos analíticos realizados por la OCDE. Sin embargo, los problemas debían verse en perspectiva para llegar a conclusiones correctas, como lo había destacado el representante de Nigeria. En relación con este punto, el orador consideraba que la única conclusión válida era que las subvenciones, al igual que cualquier otra distorsión del comercio, eran malas para el medio ambiente y, en consecuencia, debían eliminarse de raíz. Ello no equivalía a decir que pudieran dar lugar a derechos compensatorios en el sentido del GATT, porque en el régimen del GATT los derechos compensatorios se basaban en el "perjuicio" comprobado en el país de importación y no en el de exportación, donde sería extraterritorial y extrajurisdiccional.

77. Señaló que diversas delegaciones se habían referido a la necesidad de destacar en los trabajos futuros la segunda parte del sexto punto del programa de trabajo, y su delegación apoyaba ese criterio. Sería necesario comprender la forma en que los obstáculos al comercio, la progresividad arancelaria, los impuestos internos, etc., impedían que los países encontraran la política correcta de adecuado equilibrio entre las necesidades del desarrollo y el derecho a la preservación del medio ambiente. En muchos casos, consideraba que los esfuerzos por determinar la combinación conveniente se veían trabados por lo que constituía efectivamente el mercado de exportación. Serían precisos nuevos estudios para comprender la forma en que podría abordarse este aspecto. El representante de los Estados Unidos había señalado estudios según los cuales las medidas comerciales adoptadas con fines de protección del medio ambiente tenían efectos mínimos en el comercio. El orador se preguntó si tales referencias no habían sido separadas de su contexto. Sería necesario confrontar esas conclusiones con la progresividad arancelaria, los obstáculos al comercio y las restricciones cuantitativas que probablemente tuvieran efectos más importantes. Así lo ponía en evidencia el número de asuntos sometidos a grupos especiales en el GATT que se referían a medidas comerciales adoptadas con fines ambientales.

78. Otra afirmación con la que el orador coincidía era que, para reducir los efectos comerciales negativos reales o eventuales, debía existir una real transparencia que eliminara la distorsión por criterios locales, y todos los protagonistas pudieran expresarse. Esto no significaba que el orador se adhiriera al concepto de que la transparencia equivalía a la participación de todos los interesados. Debía mantenerse un equilibrio general. Tendrían que determinarse los problemas más inminentes. Los representantes de Egipto y Nigeria habían ofrecido perspectivas interesantes, y para equilibrar los diversos puntos de vista sobre el tema harían falta nuevos trabajos.

79. La representante de Suiza estimó que este punto abarcaba dos aspectos de diferente dimensión y que debían tratarse en forma separada: por un lado, el aspecto relativo al efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados; por otro, los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales. En consecuencia, la oradora dividió su intervención en dos partes. En la primera consideró que la cuestión del acceso a los mercados, desde el punto de vista comercial, se refería a la reducción o eliminación de los obstáculos comerciales con el fin de mejorar el acceso a los mercados. Este objetivo había sido alcanzado en la Ronda Uruguay,

especialmente a través de reducciones de aranceles, del apoyo no arancelario a la agricultura y de los obstáculos no arancelarios al comercio. El fortalecimiento y la ampliación de las normas, los procedimientos y las instituciones acrecentaría la seguridad jurídica del acceso a los mercados. Sin embargo, el acceso a los mercados no se determinaba únicamente por políticas comerciales sino también por políticas internas, como las medidas de protección del medio ambiente que podían tener efectos en el comercio internacional. Si las medidas de protección del medio ambiente se hacían más rigurosas y generales, podrían tener efectos más importantes en el acceso a los mercados y la competitividad. Las riquezas naturales, la capacidad de asimilación y las preferencias sociales e intertemporales tenían importantes influencias en las prioridades ambientales de los países. La elección de las políticas y los objetivos ambientales actuales y futuros podía estar afectada por el nivel de desarrollo económico de cada país, pero también por estructuras institucionales que expresaban o ponían en aplicación las inquietudes ambientales en la legislación. Sin embargo, muchos países en desarrollo carecían del marco institucional necesario para traducir la opinión pública sobre los temas ambientales en medidas de gobierno.

80. Las medidas ambientales internas, sobre todo las adoptadas por países desarrollados, tenían efectos complejos en el acceso a los mercados para los países en desarrollo y dependían de múltiples factores. A juicio de la delegación de la oradora, el acceso a los mercados podía analizarse siguiendo cinco lineamientos: en primer lugar, el tipo de instrumento, como las especificaciones técnicas de los productos, las prescripciones en materia de envase y embalaje o las medidas voluntarias como el etiquetado ecológico; en segundo lugar, la estructura de las exportaciones de los países; en tercer término, la estructura de la empresa, interesada concretamente en la medida ambiental aplicada por un país desarrollado; en cuarto lugar, lo referente a las medidas ambientales unilaterales en contraposición con las adoptadas con arreglo a un AMUMA; y en quinto lugar, la naturaleza de los problemas ecológicos en que se basaban las medidas ambientales.

81. Sin entrar en detalles, la oradora explicó brevemente estos aspectos comenzando con el primero de ellos, el tipo de instrumento y sus efectos en los países en desarrollo. Todas las medidas debían adoptarse en forma no discriminatoria y transparente y debían guardar proporcionalidad. Sin embargo, los países en desarrollo podían tener problemas específicos. Por ejemplo, el cumplimiento de determinadas prescripciones técnicas impuestas en mercados del exterior podía vincularse con dificultades relativas a la adaptación a nuevas reglamentaciones, sobre todo en cuanto al acceso a tecnologías ecológicamente racionales. Otro problema podía ser el costo del acceso a sistemas de evaluación de la conformidad. También las prescripciones en materia de embalaje podían plantear problemas a los países en desarrollo, como los mayores costos para los productores derivados de métodos como la aceptación obligatoria de envases devueltos, los sistemas de pago y reembolso de envases, el costo de la modificación de diseño de los embalajes o de los materiales utilizados para cumplir las reglamentaciones ambientales de los países importadores, y el cumplimiento de las prescripciones sobre el contenido de materiales reciclados. También podían encontrarse problemas análogos respecto de los métodos de etiquetado ecológico de los países desarrollados. Determinadas empresas exportadoras de países en desarrollo podrían tratar de competir con productos no etiquetados o verse obligadas a obtener una etiqueta ajustando el producto a prescripciones determinadas a fin de no perder su participación en el mercado. Los criterios sobre etiquetado ecológico basados en exigencias sobre el proceso de producción podían plantear problemas a las empresas exportadoras de los países en desarrollo por su falta de acceso a las respectivas tecnologías, materias primas e información.

82. En cuanto al segundo aspecto de los problemas del acceso a los mercados -la estructura de las exportaciones de los países en desarrollo- podían existir problemas de acceso a los mercados cuando el país en desarrollo estuviera orientado a la exportación. Si las empresas de los países en desarrollo se orientaban principalmente a la exportación, las medidas ambientales de los mercados del exterior podían afectar a las oportunidades de exportación debido al costo de su cumplimiento. Especialmente en los sectores de los textiles, el calzado y la madera de construcción, el cumplimiento de las medidas

ambientales de los países importadores podía afectar al comercio de esos productos y, de ese modo, a la balanza comercial. Por otra parte, podían verse limitadas las oportunidades de que las empresas principalmente orientadas al mercado interno de los países en desarrollo aumentaran sus exportaciones, al tener que hacer frente en los mercados del exterior a distintos problemas de cumplimiento respecto de las exigencias particulares aplicadas a los productos y los procesos.

83. Un tercer aspecto importante era la estructura de la empresa. Las empresas de mayor volumen, y en especial las que trataran con clientes extranjeros, podrían estar en mejores condiciones de cumplir exigencias ambientales de mercados del exterior. También podían tener mejor acceso a la información. Las empresas mayores podrían tener una base financiera más firme para innovar y ajustar su tecnología. Habida cuenta de que en los países en desarrollo el tamaño de las empresas era tradicionalmente menor que las empresas de los países desarrollados, estos aspectos adquirirían importancia. Por ello, podrían necesitarse estructuras especiales para ayudar a las pequeñas empresas a obtener un mejor acceso a los mercados extranjeros.

84. En cuanto al cuarto aspecto, referente al unilateralismo y el multilateralismo, las medidas ambientales adoptadas conforme a un AMUMA podían tener efectos diferentes para los países, en especial para los países en desarrollo, de las medidas ambientales aplicadas unilateralmente. Las medidas ambientales tomadas al amparo de un AMUMA y aplicadas por muchos países creaban una presión más fuerte para que se produjeran productos sustitutivos. Según las empresas de los países en desarrollo, esa presión multilateral podía dar lugar a que se desarrollara o se intensificara el comercio de tales productos sustitutivos. Era difícil evaluar el efecto global de esas medidas en la competitividad de las empresas de países en desarrollo; pero las medidas ambientales multilaterales ofrecían la posibilidad de desarrollar esas medidas en forma concertada.

85. En relación con el último aspecto, el referente a la naturaleza del problema ambiental, se trataba de determinar si los efectos ejercidos en el acceso a los mercados por medidas ambientales internas referentes a problemas ecológicos nacionales o regionales tenían la misma dimensión que las medidas aplicadas al amparo de un AMUMA. El efecto en el acceso a los mercados podía ser igual en sí mismo; pero en lo relativo a la gestión de los recursos de un país en desarrollo podían ser distintas. La soberanía de cada país le permitía aplicar normas ambientales exigentes; pero la aplicación de medidas relacionadas con el comercio por países desarrollados para hacer frente a problemas ambientales estrictamente locales, o aun regionales, podría causar dificultades a los países en desarrollo. Para poder mantener determinado nivel de acceso a los mercados, los países en desarrollo podrían verse forzados a dedicar más recursos a determinadas mejoras ambientales en lugar de optar sobre la base de sus propias condiciones y prioridades en materia ecológica y de desarrollo. Tratándose de medidas fundadas en un AMUMA y destinadas a resolver problemas ambientales mundiales, con períodos de transición y mecanismos de financiación especiales, el hecho de dedicar recursos al logro de mejoras ambientales mundiales podía corresponder mejor a las condiciones y prioridades de los países en desarrollo en materia de medio ambiente y desarrollo, ya que la urgencia de hacer frente a los problemas ambientales mundiales estaba ampliamente reconocida.

86. La oradora consideraba que esta breve enumeración ilustraba algunos aspectos que podrían figurar en el análisis de los problemas del acceso a los mercados para los países en desarrollo. En conclusión, el análisis de los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, sobre todo en relación con los países en desarrollo, era sumamente complejo y requeriría nuevos análisis. A largo plazo, la única forma de proteger el medio ambiente mundial era a través de la cooperación internacional, no sólo respecto de las propias medidas ambientales, sino también respecto de sus efectos comerciales. Para contar con un panorama más completo de esos efectos, resultarían útiles los estudios prácticos sobre los efectos comerciales de determinadas medidas ambientales para ciertos países en desarrollo. Ya se habían efectuado tales estudios, especialmente por la UNCTAD, y sería útil para

los trabajos del Subcomité que la Secretaría pudiese preparar un documento sobre los resultados de los análisis existentes.

87. El segundo aspecto de este punto se refería a los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales. La eliminación de restricciones comerciales significaba, en primer lugar, la reducción de los aranceles, de la ayuda no arancelaria, especialmente en la agricultura, y de los obstáculos no arancelarios. Todos estos elementos contribuirían a una eliminación formal de las distorsiones comerciales. La eliminación y reducción de los obstáculos al comercio podía tener, además, un efecto secundario positivo: el medio ambiente podía resultar beneficiado con la liberalización del comercio. La oradora mencionó algunos tipos de beneficios resultantes para el medio ambiente. En primer lugar estaban los aspectos macroeconómicos de la liberalización del comercio. Cabía sostener que el crecimiento económico podía tener consecuencias negativas para el medio ambiente. El pronóstico sobre los efectos del crecimiento sobre el medio ambiente dependía también de la forma en que el crecimiento afectase a la producción de contaminantes. Los estudios no habían demostrado una correlación absoluta entre uno y otro factor. Sin embargo, el estudio exclusivo de estos dos factores, sin tener en cuenta los efectos de otras políticas (colaterales), podría ser un enfoque demasiado estrecho. Por otra parte, el crecimiento económico podía permitir a los gobiernos aplicar impuestos y recaudar recursos para diversos objetivos, entre ellos la reducción de la contaminación y la protección general del medio ambiente. El crecimiento económico también podía acentuar la conciencia general en favor de un medio ambiente sano.

88. Un segundo aspecto era la reducción de los aranceles y los obstáculos no arancelarios. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo existía un mercado cada vez mayor para los productos y servicios ecológicos, que se debía en gran parte a las normas ambientales más rigurosas. El cambio de composición de la producción había permitido el desarrollo de importantes sectores, como el del equipo de protección del medio ambiente. La actividad de esos sectores dependía de las condiciones comerciales vigentes, y también resultaría beneficiada con la reducción de aranceles y de obstáculos no arancelarios.

89. Un tercer aspecto era la reducción de las subvenciones, sobre todo en el sector de la agricultura. Seguía prestándose ayuda oficial a determinadas ramas de la producción. Las subvenciones eran particularmente importantes en el sector de la agricultura, sobre todo en los países desarrollados. En relación con el comercio internacional y el medio ambiente, las subvenciones a la agricultura suscitaban varios problemas importantes. La inadecuada distribución de recursos podía provocar la intensificación de prácticas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente, como la salinización provocada por el riego excesivo con agua subvencionada y los daños a los ecosistemas acuáticos causados por escurrimientos de plaguicidas subvencionados. La disminución de las subvenciones en el sector de la agricultura podría dar lugar a una reasignación de recursos y al fomento de la agricultura en otros países con un contexto de producción más adecuado. A mediano y largo plazo, esto podría llevar a una producción agropecuaria más inocua para el medio ambiente. Sin exponer un cuadro completo de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la liberalización del comercio, cabía concluir que la eliminación de restricciones comerciales impulsaría la producción de productos más inocuos para el medio ambiente, pero no era suficiente si no estaba acompañada por medidas ambientales. En este sentido, el efecto real de la reducción y eliminación de obstáculos comerciales dependía en gran medida de todo el marco de la política general y de las prioridades de cada país.

90. El representante de Malasia, en nombre de los países miembros de la ASEAN, señaló que la Ronda Uruguay había dado lugar a un conjunto notable de medidas sobre el acceso a los mercados. El análisis recientemente efectuado por la Secretaría del GATT destacaba los beneficios que podían obtener tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. Según ese estudio, se preveía que los ingresos mundiales aumentarían anualmente en 510.000 millones de dólares cuando se hubieran cumplido totalmente los compromisos sobre acceso a los mercados en el año 2005, debido a la apertura

consiguiente de los mercados. El informe presentaba también las notables estimaciones siguientes de aumento anual de ingresos: 122.000 millones de dólares para los Estados Unidos; 164.000 millones para la Unión Europea; 27.000 millones para el Japón; y 116.000 millones para el conjunto de los países en desarrollo y los países con economía en transición. Ese análisis señalaba asimismo que los países en desarrollo habrían de obtener una expansión aún mayor de su comercio: un aumento del 14 por ciento. También se destacaba en el informe que la Ronda Uruguay había llevado a la eliminación de las "medidas de zona gris" y al restablecimiento de cierta disciplina en el empleo de las medidas antidumping. Su delegación consideraba que la Secretaría, en el análisis, podía no haber incluido el medio ambiente entre los factores. Las perspectivas del acceso a los mercados se basaban principalmente en las medidas de liberalización que entrarían en aplicación durante esos años.

91. Después de haberse alcanzado ese conjunto de medidas sobre el acceso a los mercados, el orador consideraba que todos los gobiernos esperarían ver los frutos de su esfuerzo traducidos en resultados palpables. Tal cosa, desde luego, sólo resultaría posible si la OMC se convertía en realidad. Por otra parte, su delegación observaba el surgimiento de algunas tendencias alarmantes, entre ellas la introducción de exigencias ambientales que amenazaban frustrar los notables resultados señalados en el informe de la Secretaría. Añadió que había nuevos problemas derivados de que las "medidas de zona gris" se convertían en "medidas de zona verde" que podían tener la consecuencia de sofocar el comercio. Concretamente se estaban dictando ya leyes que prohibían la construcción de edificios oficiales con madera tropical. El significado real de esto era que las posibilidades comerciales previstas, derivadas de las concesiones sobre el acceso a los mercados, no podrían concretarse debido a este tipo de medidas que se introducían sin relación con ninguna evaluación científica, sino motivadas más bien por conveniencias políticas. El conjunto de medidas sobre el acceso a los mercados corría un real peligro de convertirse en un "elefante blanco". A largo plazo, la imposición de nuevas condiciones vinculadas con el medio ambiente sólo haría que las partes contratantes se sintiesen defraudadas. Convenía que ello se evitase en bien de los intereses de largo plazo del sistema internacional de comercio.

92. El representante de las Comunidades Europeas expuso ciertas opiniones preliminares sobre algunos de los temas incluidos en este punto. La CNUMAD había llegado a la conclusión de que el comercio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible debían abordarse en forma integrada y debía lograrse que las políticas seguidas en esas esferas se apoyaran mutuamente. Debían señalarse varios de los principios y conceptos convenidos en Río que podían ser aplicables a este punto. Era importante el principio 2, en cuanto reconocía el derecho soberano de los Estados a explotar sus recursos conforme a su propia política en materia de medio ambiente y de desarrollo, pero también les imponía la responsabilidad de asegurar que las actividades desarrolladas bajo su jurisdicción o control no causaran daños al medio ambiente de otros Estados o zonas situadas más allá de los límites de su jurisdicción nacional.

93. El principio 4 de la Declaración de Río afirmaba: "A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada". Por otro lado, el principio 6 afirmaba que "se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberán tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países". También interesaba en esta discusión el principio 11 de la Declaración de Río, en cuanto precisaba que "los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo". Por último, el principio 12, en especial en su primera oración, disponía que "los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental".

94. Como se había reconocido por la CNUMAD, la conclusión de la Ronda Uruguay había constituido un paso importante. El libre comercio facilitaba la distribución eficiente de los recursos. El principal resultado era que, a través del principio de las ventajas comparativas, cada país se especializaba en la producción de los bienes para los que era más eficiente. Ello daba lugar a un mayor bienestar mundial. En todos estos sentidos, la eliminación de aranceles y obstáculos no arancelarios no sólo tenía efectos positivos desde el punto de vista de la riqueza y el nivel de vida apreciados en términos monetarios, sino que también podía tener consecuencias positivas en el medio ambiente siempre que se adoptara una política ambiental adecuada. En consecuencia, también por razones ambientales, los beneficios de la Ronda Uruguay deberían completarse ahora mediante la ratificación y aplicación, y los trabajos del Subcomité debían proseguir constructivamente.

95. En lo relativo al medio ambiente y el desarrollo, la principal tarea consistía en compatibilizar y lograr que se apoyaran mutuamente el derecho a la protección del medio ambiente en un nivel elevado y el derecho de todos los países, sobre todos los menos desarrollados y menos adelantados, a recoger los beneficios del comercio a través de medidas convenidas de acceso a los mercados. El primer término de esta ecuación, es decir, el derecho de los Miembros de la OMC a adoptar una protección ambiental interna de alto nivel, estaba aclarado en los textos de la Ronda Uruguay, particularmente el Preámbulo del Acuerdo por el que se establece la OMC, donde se reconocía la importancia de que se actuara "procurando proteger y preservar el medio ambiente". Asimismo los Preámbulos de los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias aclaraban que no debería impedirse a ningún Miembro de la OMC que adoptase y aplicase las medidas necesarias para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales y para la protección del medio ambiente, desde luego que con sujeción a las condiciones establecidas en esos Acuerdos.

96. Al mismo tiempo, la delegación del orador consideraba que los acuerdos de la Ronda Uruguay desarrollaban con alcance considerablemente mayor el criterio, ya expuesto por ejemplo en la Parte IV del Acuerdo General, de admitir en el marco del sistema comercial no discriminatorio un trato más favorable a los países menos adelantados, en especial a los países sin litoral, teniendo en cuenta sus necesidades especiales y sus problemas específicos. La Decisión de la Ronda de Tokio de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y participación más completa de los países en desarrollo estaba inspirada por el mismo espíritu. Más concretamente, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establecían la posibilidad de otorgar un trato especial y diferenciado a los países menos adelantados. Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 10 del segundo de esos acuerdos preveía que el Comité establecido por él otorgara a los países menos adelantados excepciones especificadas y de duración limitada al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Acuerdo. La delegación del orador consideraba especialmente interesante, a los efectos de este análisis, el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que disponía que "cuando el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria permita el establecimiento gradual de nuevas medidas sanitarias o fitosanitarias, deberán concederse plazos más largos para su cumplimiento con respecto a los productos de interés para los países en desarrollo Miembros, con el fin de mantener sus oportunidades de exportación".

97. En el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, al mismo tiempo que se preveía en el párrafo 8 del artículo 12 una posibilidad similar respecto del Comité de ese Acuerdo que para el Comité del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, es decir, de otorgar excepciones por plazos limitados en favor de los países menos adelantados, también se hacía hincapié (en el párrafo 7 del artículo 12) en el aspecto del suministro de asistencia técnica, de común acuerdo, a los países en desarrollo "a fin de asegurarse de que la elaboración y aplicación de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios a la expansión y diversificación de las exportaciones de estos Miembros". Existían numerosas disposiciones análogas en los acuerdos de la Ronda Uruguay que no se referían necesariamente en forma

exclusiva a la protección del medio ambiente, pero en las que se instaba a los países desarrollados a tener en cuenta especialmente la situación particular de los países en desarrollo Miembros al aplicar medidas que pudiesen tener efectos negativos en su acceso a los mercados. Por ejemplo, en el artículo 15 del Acuerdo Antidumping se indicaba que "los países desarrollados Miembros deberán tener particularmente en cuenta la especial situación de los países en desarrollo Miembros cuando contemplen la aplicación de medidas antidumping ...". Un último ejemplo lo constituía la Decisión relativa a las Medidas en Favor de los Países Menos Adelantados, adoptada en Marrakech, en la que se reconocían "las necesidades específicas de los países menos adelantados en la esfera del acceso a los mercados, donde el mantenimiento del acceso preferencial sigue siendo un medio esencial para mejorar sus oportunidades comerciales".

98. Estas disposiciones mostraban que el sistema del GATT/OMC permitía cierto grado de flexibilidad en favor de los países en desarrollo respecto del cumplimiento de las normas cuando resultara inadecuado en vista de sus problemas específicos. Cabría considerar, al estudiar las relaciones recíprocas entre la protección del medio ambiente, el acceso a los mercados y el desarrollo, que pudiera aplicarse un criterio similar. Por ejemplo, podría pensarse en que los países desarrollados, al establecer medidas de protección del medio ambiente que afectasen en particular a los países en desarrollo en su acceso a los mercados, consideraran la posibilidad de aplicar un plan diferenciado para su cumplimiento, como una exoneración por plazo determinado de las obligaciones respectivas u otras formas de períodos de aplicación gradual o eliminación gradual. Otra posibilidad, como se indicaba en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, era que los países desarrollados considerasen la posibilidad de otorgar, en forma positiva, asistencia técnica o financiera, de común acuerdo, a los países en desarrollo a fin de ayudarles a cumplir las nuevas reglamentaciones de protección del medio ambiente.

99. Sin embargo, debía hacerse una advertencia. Sobre todo en lo relativo a los períodos de aplicación gradual, era fundamental que fuesen compatibles con el logro del objetivo ambiental. En otras palabras, esas excepciones de duración limitada no deberían crear el peligro de frustrar el objetivo ambiental de la medida. El párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ofrecía un buen modelo en el sentido de que podrían concederse plazos más largos para el cumplimiento con respecto a los productos de interés para los países en desarrollo, pero solamente cuando así lo permitiera el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria. Cabría imaginar un método similar para las medidas ambientales, cuando fuese adecuado. Los negociadores de AMUMA podrían estudiar ese criterio al considerar medidas que pudiesen afectar directa o indirectamente al comercio. Sin embargo, correspondería a esos negociadores decidir si la concesión de plazos de aplicación gradual para los países en desarrollo o menos adelantados sería admisible desde el punto de vista ambiental.

100. Por último, con respecto al trato especial a los países en desarrollo, cabía pensar en un método que constituiría el reverso del otorgamiento de plazos de aplicación gradual mientras mejoraban su capacidad de aplicar normas ambientales más rigurosas. Consistiría en otorgar un trato especial desde el punto de vista del acceso a los mercados a los productos cuyas características, o cuyo método de producción, hubiesen sido reconocidos internacionalmente como inocuos para el medio ambiente. El orador desearía conocer las opiniones de otras delegaciones, sobre todo de países en desarrollo, acerca de tal enfoque.

101. Añadió que un instrumento importante para evitar los efectos innecesarios de las medidas ambientales en el acceso a los mercados era la efectiva transparencia y la difusión de informaciones. Sobre todo la transparencia *ex-ante* podría ayudar a evitar los conflictos entre la protección del medio ambiente y el acceso a los mercados. Esta cuestión podría analizarse más detenidamente en el futuro en relación con el cuarto punto del programa de trabajo. Por el momento, se limitaba a señalar que podrían ser útiles los modelos que ofrecía el artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda Uruguay, así como el Anexo B del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas

Sanitarias y Fitosanitarias, es decir, la publicación de notificaciones *ex-ante* sobre las medidas que no se ajustaran a normas internacionales o cuando éstas no existieran, para recibir observaciones y discutir las según se solicitase. Desde luego, como se había acordado en el Grupo MACI, las obligaciones de transparencia no debían ser tan engorrosas desde el punto de vista administrativo que resultasen impracticables.

102. El orador agregó que diversas delegaciones habían mencionado los posibles efectos ambientales negativos resultantes de las distorsiones comerciales y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de esas distorsiones, en especial la delegación de la Argentina con respecto a la agricultura. La delegación del orador consideraba que, en la medida en que tales efectos ambientales negativos efectivamente se producían, nunca se insistiría demasiado en el gran paso que ya se había dado en la Ronda Uruguay, ya que la mejora del acceso a los mercados derivada de la Ronda aumentaba las posibilidades de que la producción se realizara en países que tuvieran la capacidad ecológica de llevarla a cabo en forma ecológicamente eficiente. También con respecto al Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay podía considerarse que permitía intensificar la producción realizada en esos países y al mismo tiempo mejoraba el acceso a los mercados en favor de los países en desarrollo. Debía destacarse que la liberalización del comercio tenía muy buenas posibilidades de crear beneficios para el medio ambiente siempre que los países que resultaran favorecidos por esa liberalización aplicasen una política ambiental adecuada. Si los incentivos de la Ronda, en consecuencia, llevaban a algunos países a modificar estrategias o métodos de producción agrícola, ello debería estar acompañado de instrumentos de política correctos que también tuviesen en cuenta los efectos ecológicos de la agricultura.

103. Por último, el orador añadió que varios países, entre ellos países en desarrollo, habían adoptado medidas no arancelarias sobre diversos productos de los sectores de los recursos naturales y las materias primas. Esas medidas daban una ventaja competitiva artificial a los productores nacionales frente a sus competidores extranjeros. Tales medidas podían clasificarse en tres categorías: el suministro de materias primas a los productores nacionales a precios inferiores a los del mercado mundial, las restricciones de la exportación de materias primas, y los impuestos de exportación diferenciales aplicados a las materias primas y a los productos elaborados. Su delegación consideraba que en ciertos casos esas medidas podían tener efectos negativos en el medio ambiente a través de la distribución ineficiente de los recursos naturales y su sobreexplotación por los productores nacionales que los utilizaban. Por consiguiente, en cualquier análisis de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de restricciones y distorsiones del mercado, esa cuestión también debería tenerse en cuenta y analizarse más detenidamente.

104. El representante de la India se manifestó de acuerdo en la hipótesis fundamental de que la liberalización del comercio era decisiva y liberaba recursos que permitirían a los países en desarrollo una mejor protección del medio ambiente. El orador comprendía que para algunos países desarrollados había niveles de consumo excesivos y otros factores que podían llevarles a poner en tela de juicio esa hipótesis. Su delegación consideraba que si no se disponía de acceso a los mercados y la liberalización del comercio no resultaba posible a través de un sistema multilateral de comercio abierto, no discriminatorio y equitativo, se producirían consecuencias desastrosas para la protección del medio ambiente en los países en desarrollo. Esta conclusión tendría que aceptarse incondicionalmente para que el Subcomité pudiera avanzar en el estudio del tema.

105. Al hablar de los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, las medidas de las que se trataba, conforme al mandato del Subcomité, eran las cargas e impuestos, las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y las prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado. También la cuestión de la transparencia era aplicable al tema del acceso a los mercados. Con respecto a los efectos de tales medidas sobre el acceso a los mercados, su delegación contemplaba tres efectos posibles: los obstáculos al comercio de los países en desarrollo que afectarían al acceso a los mercados; los problemas de

competitividad que podrían plantearse, aunque los elementos de juicio no eran concluyentes a su respecto, provocando consecuencias en el acceso a los mercados; y la prohibición del acceso a los mercados de bienes y servicios por esa clase de fundamentos. Su delegación consideraba que el documento de la Secretaría podría analizar estos tres efectos posibles. Sólo podría realizarse un análisis desapasionado de los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados de interés para los países en desarrollo si se estudiaba la medida en que el acceso a los mercados resultaba afectado en los países en desarrollo, y con referencia al conjunto de los productos que eran importantes para ellos.

106. El orador consideraba que, en última instancia, el análisis del Subcomité basado en los criterios expuestos debería llevar a algunas indicaciones. Preguntó cómo podría lograrse el acceso a los mercados, tan fundamental para la protección del medio ambiente de los países en desarrollo, al mismo tiempo que se hacía posible el logro del desarrollo sostenible. Su delegación consideraba que para tales medidas ambientales eran indispensables disciplinas más estrictas y normas más claras. De lo contrario habría una tendencia al proteccionismo y al abuso, con repercusiones negativas en el acceso a los mercados para los países en desarrollo. Su delegación también consideraba necesario seguir el camino de los AMUMA basados en un consenso internacional. Era posible que ello crease efectos negativos inevitables en el acceso a los mercados, en cuyo caso su delegación plantearía la necesidad de algún mecanismo de asistencia financiera y transferencia de tecnología dentro del marco de los AMUMA.

107. Por último, las medidas comerciales unilaterales adoptadas con fines de protección del medio ambiente casi siempre afectaban al acceso a los mercados para los países en desarrollo porque el fundamento mismo de las medidas comerciales unilaterales consistía en que los países más fuertes podían imponerlas a los más débiles. Al margen de que tales medidas estaban fundadas en principios inadmisibles, su delegación consideraba que afectarían al acceso a los mercados, conducirían al agotamiento de valiosos recursos y, en último análisis, serían contraproducentes para el logro del desarrollo sostenible. El orador propuso que el Subcomité se mantuviera en estrecho contacto con la UNCTAD, que había realizado en esta materia importantes trabajos que podrían aprovecharse. También sería útil observar lo que en esta esfera estaba realizando el CCD. En último análisis, la salvaguardia de un sistema multilateral de comercio abierto, no discriminatorio y equitativo garantizaría el acceso a los mercados para los países en desarrollo.

108. El orador añadió que había sectores determinados en los que cabía prever la eliminación de restricciones y distorsiones comerciales, como los sectores de los textiles y la agricultura. Convino con el representante de Hong Kong sobre los efectos de las subvenciones en la agricultura. Consideró que la mayor amenaza al acceso a los mercados consistía en el proteccionismo verde. En el sector de los textiles, durante los últimos 30 años se había aplicado un arbitrario régimen de contingentes con el que se imponían restricciones comerciales a productos exclusivamente provenientes de países en desarrollo. Ahora, como resultado de la Ronda Uruguay, existía un compromiso inequívoco de eliminar el Acuerdo Multifibras en un plazo de diez años. Al mismo tiempo había surgido un interés súbito por los métodos de elaboración y producción en la esfera de los textiles. Era natural la inclinación a pensar que existía un vínculo entre ambas tendencias, que apuntaba al proteccionismo. Éste era el tipo de análisis que su delegación esperaba. La historia del comercio internacional mostraba que, cuando existían posibilidades de ventajas competitivas para los países en desarrollo, se había intentado imponer restricciones en una u otra forma. Los países en desarrollo tenían el deber de demostrar que no ocurría así. No ocurría, en efecto, para quienes creían verdaderamente en el desarrollo sostenible, pero les correspondía la carga de probarlo.

109. La representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, consideró que al discutir los efectos de las políticas ambientales en el acceso a los mercados era importante dejar establecido que se trataba de problemas ambientales que todos los países tenían la responsabilidad común de resolver. La inquietud por la protección del medio ambiente era muy general y no podía ser desconocida. En muchos países había una demanda cada vez mayor de los consumidores que afectaría a las pautas del

comercio internacional. El punto de vista de su delegación estaba determinado por la circunstancia de que sus países tenían economías pequeñas y abiertas, muy dependientes de la exportación. Por ello, compartían la preocupación de muchos países en desarrollo por la posible utilización indebida de la protección del medio ambiente como forma de proteccionismo encubierto. Sin embargo, no debía exagerarse el papel de la protección ambiental como obstáculo al comercio en relación con otros diversos factores por los que el comercio distaba mucho de ser libre.

110. La dimensión Norte-Sur no debía invocarse indebidamente como pretexto para retrasar normas ambientales más ambiciosas cuando su introducción era necesaria. No debía permitirse que ocurriese tal cosa. La dificultad consistía en encontrar la forma de aplicar una política ecológicamente racional y, al mismo tiempo, cuidar los intereses económicos y de desarrollo vitales para los países menos adelantados, por ejemplo, mediante plazos de gracia y el suministro de asistencia técnica y financiera al formular planes de protección ambiental. Sería una simplificación hacer hincapié en el "proteccionismo verde" olvidando otras formas de proteccionismo contra los países menos adelantados. Las medidas y prescripciones ambientales tenían efectos positivos tanto en el medio ambiente como en el desarrollo de los países en desarrollo. Algunas de esas medidas se habían establecido a solicitud de países en desarrollo y por insistencia de ellos. Por ejemplo, en la Convención de Basilea se convino en prohibir la exportación de desechos peligrosos de países de la OCDE a otros países. Ésta fue en su origen una propuesta de los países del Grupo de los 77. En la FAO, los Países Nórdicos habían dado su apoyo recientemente a un procedimiento destinado a imponer restricciones rigurosas al comercio de productos químicos peligrosos, sobre la base del consentimiento fundamentado previo. También en ese caso el interés de los países en desarrollo se había manifestado con energía. Igualmente en un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, correspondiente a la Convención sobre la Diversidad Biológica, el consentimiento fundamentado previo representaría un elemento central; los países en desarrollo habían sido y seguían siendo paladines de esa propuesta.

111. La delegación de la oradora consideraba que la eliminación de las restricciones comerciales podría determinar beneficios para el medio ambiente y mejorar el acceso a los mercados a nivel mundial. La Ronda Uruguay había mejorado en diversas formas las oportunidades de acceso a los mercados para los países en desarrollo; pero ello podría llegar más lejos. El objetivo era claro: hacer que el comercio y el medio ambiente se apoyaran mutuamente. Un comercio más libre impulsaría el crecimiento económico general y mejoraría la distribución eficaz de los recursos si también se tomaban en consideración los problemas ambientales. Su delegación deseaba plantear cuatro cuestiones sobre las formas en que podrían lograrse mejores oportunidades de mercado.

112. En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información tenían importancia fundamental para asegurar que las medidas ambientales no se convirtieran en obstáculos innecesarios al comercio. A este respecto ofrecían ejemplos útiles el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Ambos incluían disposiciones sobre la transparencia, así como la creación de servicios de información nacionales y procedimientos eficaces de notificación. Una de las oportunidades para mejorar el acceso a los mercados para los países en desarrollo consistía en los sistemas de etiquetado ecológico, que podían promover los productos inocuos para el medio ambiente. Para asegurar ese objetivo, sin embargo, era importante que también los productores de los países en desarrollo pudiesen contribuir a fijar los criterios aplicables. Al margen de los criterios científicos, la oradora también consideraba de importancia el principio de precaución. Los sistemas de etiquetado ecológico eran un instrumento útil en los esfuerzos por una sociedad sostenible. Tenían aspectos relacionados con el comercio que podían ser de naturaleza técnica y compleja y necesitaban analizarse más detenidamente. Por ejemplo, la cuestión de si el reconocimiento mutuo podía mejorar el acceso a los mercados era un tema que podría estudiarse más a fondo, eventualmente en grupos de expertos. A ese respecto podría ofrecer un aporte útil el Grupo Especial de Trabajo de la UNCTAD.

113. En segundo lugar, para mejorar las posibilidades de exportación era importante que la mayor cantidad posible de países contasen con tecnologías ecológicamente racionales. La Ronda Uruguay, una vez aplicada, facilitaría la transferencia de tecnología. Por ejemplo, el propósito del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio era mejorar las condiciones para que las empresas invirtiesen en países extranjeros, al asegurar que no se perdería el valor de la tecnología. De este modo, los conocimientos técnicos se difundirían en todo el mundo de manera más equilibrada. Ciertos estudios, como los realizados por la OCDE, habían mostrado que una condición previa importante de la transferencia de tecnología era la adecuada legislación nacional sobre el medio ambiente. De ese modo se obligaría a las empresas a invertir en tecnologías ecológicamente racionales que no eran necesariamente más onerosas. En este aspecto, la función de la asistencia técnica a los países menos adelantados era decisiva. La legislación y su aplicación tendrían efectos más vastos que el aumento de la financiación. Pero era preciso ir más lejos. Por consiguiente, su delegación apoyaba la realización de trabajos internacionales sobre el comercio y las inversiones y sus efectos en el acceso a los mercados, la transferencia de tecnología y el medio ambiente. Una forma importante de asegurar la difusión de los conocimientos técnicos era a través de la mayor previsibilidad y estabilidad de las normas y prácticas nacionales.

114. En tercer término, la reforma y la liberalización del comercio de productos agropecuarios, incluidas en la Ronda Uruguay, y la integración del sector de los textiles y las prendas de vestir en el sistema de la OMC darían beneficios considerables a los países en desarrollo. También sería un interesante tema para nuevos análisis el efecto de las subvenciones en general. Ese análisis tendría que procurar la evaluación de los efectos en el acceso a los mercados para los países en desarrollo, como también en el medio ambiente de los países de exportación y de importación. En cuarto lugar, otra característica relacionada con el acceso a los mercados era la arancelización y sus consecuencias en el medio ambiente, que merecerían un análisis más completo. En conclusión, la oradora había ofrecido ciertas ideas para mejorar las oportunidades de acceso a los mercados sin comprometer las políticas ambientales adecuadas, para promover de ese modo el objetivo común del desarrollo sostenible, mejorar la estabilidad y previsibilidad del sistema multilateral de comercio y hacer que el sistema de comercio y la protección del medio ambiente se apoyasen mutuamente. Consideró que el Comité debería centrar sus deliberaciones del año siguiente más precisamente en algunos de los puntos de su programa de trabajo a fin de cumplir su mandato. Al mismo tiempo destacó la necesidad de asegurar la total transparencia para todas las delegaciones en los trabajos sobre cuestiones técnicas. Sólo una profundización de los trabajos podría permitir que el Comité presentara resultados y recomendaciones adecuadas en la primera reunión ministerial de la OMC.

115. La representante de México estimó que el sexto punto presentaba dos claras aristas que, si bien se vinculaban entre sí, deberían analizarse separadamente: i) los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados; y ii) el análisis de los posibles beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales. Respecto del primer aspecto, su delegación coincidía con otras en que debía considerarse una cuestión de alcance general, presente en el análisis de todos los demás temas del programa de trabajo. Ello estaba en consonancia con el capítulo 2 del Programa 21, que tocaba aspectos fundamentales para el sistema de comercio internacional como la promoción y la protección del acceso a los mercados como motor del crecimiento económico y, por consiguiente, del desarrollo sostenible, en particular en los países en desarrollo.

116. Era menester señalar que los efectos comerciales de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados podían afectar tanto a los países en desarrollo como a países desarrollados. Sin embargo, debía tenerse en cuenta que el impacto global y los efectos secundarios de tales medidas podían ser más significativos y nocivos para los primeros, por su situación y sus necesidades particulares en materia financiera y tecnológica. Además, el comercio era un instrumento vital y una condición indispensable para el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. Ello había sido ampliamente reconocido en

los principios básicos y las recomendaciones resultantes de la Conferencia de Río, y su delegación no creía que hubiese motivos para ponerlo en duda. El comercio era la vía primordial mediante la cual estos países podían tener acceso a una asignación de recursos monetarios que les permitiera llevar a cabo medidas encaminadas a procurar la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales. La necesidad más imperante respecto de este tema era la de asegurar la integración efectiva y creciente de los países en desarrollo en el sistema de comercio internacional, mediante un mayor y más previsible acceso a los mercados que a la vez fuera equitativo, no discriminatorio y no condicionado.

117. A juicio de su delegación, la cuestión relativa al acceso a los mercados debía analizarse desde dos perspectivas. Por un lado se requería explorar formas y mecanismos para incrementar el acceso a los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo, de manera que pudiesen contar con los recursos indispensables para mejorar su nivel de vida e invertir en la protección del medio ambiente. La pronta aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay constituiría una contribución importante en tal sentido, aunque existían aún vías inexploradas que podrían ser materia de deliberación, entre ellas las mencionadas por el Canadá, el Brasil y otros, como la vinculada con el escalonamiento arancelario. Otra vía interesante por analizar era la referente a las posibilidades de exportación de los países en desarrollo en materia de servicios ambientales y productos inocuos para el medio ambiente, como los materiales naturales para el empaquetado cuya utilización había demostrado ser más eficiente desde el punto de vista ambiental que los materiales actualmente empleados en diversos programas sobre empaquetado y reciclado de países desarrollados.

118. Por otro lado, se hacía indispensable crear los mecanismos necesarios para asegurar la preservación del acceso a los mercados con que ya contaban los países en desarrollo y por los que habían pagado, ante los posibles efectos de distorsión comercial derivados de la aplicación de medidas ambientales. Esto significaba que el análisis del acceso a los mercados debía cubrir tanto el lado "positivo" consistente en la exploración de nuevas oportunidades y de preferencias no condicionadas para las exportaciones de los países en desarrollo (para lo cual el Subcomité podría apoyarse inicialmente en estudios ya realizados en otros organismos como la UNCTAD y el CCI), como también el lado "negativo", consistente en la identificación, vigilancia y tratamiento de las medidas y prescripciones ambientales cuyos efectos pudieran causar pérdidas o anulación del acceso existente. Este último elemento era de crucial importancia porque a los países en desarrollo les preocupaba tanto obtener mayor acceso a los mercados como también conservar el que ya tenían. Los efectos limitantes o de distorsión del comercio derivados de las medidas ambientales podían responder a medidas y criterios legítimos, aunque pudieran tener gran impacto adverso sobre el acceso a los mercados y la competitividad de las exportaciones de los países en desarrollo, pero también podían responder a criterios inspirados por fines proteccionistas.

119. Se había señalado que ciertas medidas que podían ser legítimas, como algunas relacionadas con requisitos relativos a programas de empaquetado y etiquetado ecológicos, tenían efectos que podían prácticamente anular el acceso a los mercados, dado que los criterios en que se basaban difícilmente podían cumplirse por proveedores extranjeros. Esos proveedores podían sufrir efectos negativos sobre la competitividad de sus productos, incluso una vez que éstos habían entrado en el mercado, por la fuerte influencia que podían ejercer tales programas sobre las preferencias de los consumidores. La imposición de tales criterios en programas y normas (en particular, los referentes a procesos y métodos de producción) sobre las importaciones provenientes de países en desarrollo representaba graves problemas de adaptación en el mercado y, en muchos casos, podía tener efectos contraproducentes, incluso en el medio ambiente, tanto en el país que aplicaba la medida como en el que se veía forzado a adaptarse a ella.

120. Ante la posibilidad de que tales situaciones se multiplicaran a medida que se incrementara el uso de medidas y requisitos con fines ambientales, resultaba importante la determinación y vigilancia

de las medidas que pudieran tener ese tipo de efectos sobre el acceso a los mercados, particularmente de los países en desarrollo. Ello podría llevarse a cabo con la ayuda de una base de datos, como se había discutido en el CCD y se había propuesto por el Brasil, que se podría enriquecer con el trabajo ya realizado también por otros organismos como la UNCTAD y las contribuciones hechas por los países participantes en el Subcomité. Una vez mejor determinadas esas medidas, se podría examinar la eficacia y la necesidad de su aplicación a las importaciones provenientes de los países en desarrollo (incluyendo los posibles efectos secundarios), así como estudiar posibles mecanismos que ayudaran a superar tales efectos y que pudieran recomendarse por el Subcomité, como una mayor transparencia, el reconocimiento mutuo y la equivalencia en materia de normas, o incluso la creación de disciplinas más estrictas aplicables a ciertos requisitos y medidas.

121. En lo referente a las medidas específicamente prescritas en AMUMA, consideradas generalmente como legítimas por estar respaldadas por un amplio consenso internacional, la oradora esperaba con interés el examen ya iniciado por la Secretaría sobre la efectividad de esas medidas, en particular las orientadas a países no partes en tales acuerdos. En dicho examen podrían destacarse de manera particular los aspectos referentes a los países en desarrollo y los efectos, directos e indirectos, de la aplicación de esas medidas sobre el acceso a los mercados de sus exportaciones en particular, y sobre su proceso de desarrollo en general. También era probable que los efectos de distorsión sobre el acceso a los mercados derivasen de medidas que respondieran a criterios con posibles fines proteccionistas. La mejor manera de actuar para evitar y corregir esa tendencia sería procurando un estricto apego en los trabajos del Subcomité a los principios y recomendaciones básicos de la CNUMAD, en particular los que indicaban, en primer lugar, que los problemas ambientales debían ser atacados desde su raíz y no necesariamente por la vía de la restricción comercial; en segundo lugar, que los problemas ambientales internos de los países que no afectarían a otros países debían resolverse por las autoridades nacionales con políticas adecuadas conformes con sus objetivos y prioridades y con su propio contexto medioambiental y de desarrollo; y en tercer lugar, que los problemas ambientales que iban más allá de las fronteras nacionales, con efectos transfronterizos o mundiales, deberían resolverse a través de la cooperación y el consenso internacionales.

122. Otro principio que su delegación consideraba fundamental recordar y tener en cuenta a lo largo de las deliberaciones del Subcomité era el referente a las responsabilidades diferenciadas de los Estados en los esfuerzos por el desarrollo sostenible, en vista de las diferentes contribuciones a la degradación ambiental, así como en virtud de las diferencias en la posesión de tecnologías y recursos financieros. Por último, la oradora se refirió brevemente al segundo aspecto del tema en examen, relativo a los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de restricciones y distorsiones comerciales. Este tema era igualmente un aspecto de vital importancia. La Argentina, Australia y el Brasil, entre otros, habían puesto de relieve la necesidad y urgencia de abordar las restricciones y distorsiones comerciales que afectaban negativamente al medio ambiente, en particular las que actuaban en forma contraria a una eficiente distribución de los recursos ambientales causando, entre otros problemas, la sobreexplotación de recursos naturales, en particular de productos básicos, como lo eran las subvenciones a la agricultura. Si realmente existía interés por que el sistema de comercio contribuyese a una mejor protección ambiental y al logro del desarrollo sostenible, no podría dejarse a un lado este aspecto, que debería discutirse en forma específica en el marco de la OMC.

123. El representante del Japón convino en que este punto tenía un alcance muy vasto y era una cuestión que abarcaba todo el programa de trabajo. Cabía afirmar que los efectos de las medidas ambientales en el acceso a los mercados y los beneficios ambientales resultantes de la eliminación de restricciones y distorsiones comerciales eran temas medulares de las deliberaciones del Subcomité. Así como la expresión "medio ambiente" tenía un alcance amplio y no era fácil de definir, también las "medidas adoptadas con fines ambientales" eran de alcance muy vasto. El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados sería variado, según múltiples elementos como el alcance y

la naturaleza de la medida, quién la hubiera tomado, con qué fines, a quiénes se aplicara, en qué etapa (de producción, exportación, distribución, importación o consumo), etc.

124. Por lo tanto, las cuestiones relativas al acceso a los mercados podrían plantearse no sólo entre países en desarrollo y países desarrollados, sino también dentro de los países desarrollados. Además, tales problemas podían plantearse dentro de los países en desarrollo e incluso entre empresas situadas en un mismo país. Muchas delegaciones, entre ellas las de la Argentina, los Estados Unidos, Egipto y Nigeria, habían ilustrado la complejidad, el gran alcance y hasta la incertidumbre que podían tener estos problemas y sus derivaciones. A juicio de su delegación, esas consideraciones destacaban la necesidad de un método basado en el estudio de casos prácticos. Los argumentos generalizados podían correr el riesgo de perder de vista numerosos aspectos importantes. Si se procurase elaborar una fórmula jurídica a esta altura podría llegarse a conclusiones apresuradas que serían contraproducentes. A este respecto, su delegación apreciaba el análisis efectuado por el representante de Suiza.

125. En las deliberaciones se habían propuesto varios conceptos orientadores, como el trato nacional, el principio de la nación más favorecida, la transparencia, la necesidad, la menor restricción del comercio, los obstáculos innecesarios al comercio internacional, la discriminación arbitraria o injustificada entre países en iguales condiciones, las restricciones encubiertas del comercio y la evitación de la aplicación unilateral de normas y reglamentos internos a objetivos situados fuera de la jurisdicción del país que adoptara la medida. Tales conceptos deberían tenerse en cuenta al aplicar el método del estudio de casos prácticos. Se había reconocido ampliamente que el aumento de ingresos generado por la expansión del comercio era una fuente importante de nuevos esfuerzos tendientes a la mejor protección del medio ambiente, y que la conclusión con éxito de la Ronda Uruguay era una contribución importante al desarrollo sostenible. La tarea más urgente que debía abordarse era la ratificación de los acuerdos de la Ronda Uruguay en las fechas previstas y la aplicación de sus resultados rápidamente y con buena fe. El Comité debería seguir discutiendo diversas cuestiones con espíritu positivo y constructivo, con vistas a asegurar que las medidas comerciales con fines de protección del medio ambiente y las medidas no comerciales que pudieran tener efectos comerciales constituyesen otro paso en la dirección del mantenimiento y fortalecimiento de las normas y disciplinas del sistema multilateral de comercio.

126. El representante de Nueva Zelandia coincidió en que el punto en examen era una cuestión que abarcaba todos los aspectos del tema, así como con diversas observaciones formuladas por los delegados acerca de la relación inversa del proteccionismo comercial con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, sobre todo en el sector de la agricultura. La premisa básica general de todos los países, de que el comercio impulsaba el desarrollo sostenible, resultaba incuestionable como lo habían demostrado diversos estudios, aunque en algunos casos existiera la necesidad consiguiente de mecanismos complementarios de protección del medio ambiente, sobre todo en el ámbito interno. En relación con observaciones formuladas por los Estados Unidos, el orador suponía que los estudios a los que se había hecho referencia correspondían a los principales países industrializados y aludían a la falta de efectos de las medidas ambientales sobre la competitividad principalmente por los efectos positivos de las normas para la promoción de la eficiencia y también por sus efectos en el desarrollo de industrias y servicios vinculados con el medio ambiente.

Punto 1 del programa de trabajo

127. El representante de Colombia consideró que el estudio de este punto planteaba el problema de si debía establecerse un procedimiento que hiciera compatibles los AMUMA con las disposiciones del GATT. Su delegación creía que ello era así, y que esta labor debía partir del reconocimiento de la existencia de una serie de AMUMA que contenían cláusulas comerciales. Su delegación estimaba que sería preferible evitar la inclusión de ese tipo de cláusulas en acuerdos que de por sí tenían objetivos ajenos a la regulación del comercio, pero debía aceptarse que en la práctica no sería posible preservar

una nítida delimitación. A partir de la premisa indiscutible de que el GATT, y en el futuro la OMC, eran el foro de donde emanaban las reglas en materia comercial y donde se dirimían las controversias de ese orden, era preciso formular unos principios para evitar que, al amparo de los postulados de protección del medio ambiente, se anularan o frustraran los logros y compromisos alcanzados y que se alcanzaran en el futuro en el sistema multilateral que regulaba las relaciones comerciales entre sus Miembros. Es decir, el GATT no podía admitir la apertura de una ventana ecológica por la cual ingresarían medidas de corte proteccionista.

128. A fin de lograr la compatibilidad entre los AMUMA y las normas del GATT y evitar interferencias indebidas, era preciso fijar en el seno del GATT/OMC criterios específicos acerca de la idoneidad y los efectos de la inclusión de medidas comerciales en los AMUMA. A este respecto, el orador compartía la opinión de varias delegaciones en el sentido de que esos criterios podían referirse a aspectos como la no discriminación, el trato nacional, la necesidad de la medida y su base científica, la transparencia, la proporcionalidad, la efectividad y el criterio de que la medida debía ser lo menos restrictiva posible. Su delegación había considerado interesante y bien intencionada la tesis según la cual debería ejercerse un control *ex-post* sobre las medidas comerciales incluidas en los AMUMA, aunque ello podía dar lugar a trámites lentos y complejos que de seguro incluirían controversias sobre competencia y legitimidad de la OMC para realizar tal procedimiento de calificación. Lo más apropiado para garantizar que esas medidas se ajustaran a los criterios que llegaran a acordarse en el GATT/OMC sería establecer que, en caso de conflicto en materia de comercio derivado de las disposiciones de los AMUMA, las partes, aunque fueran todas ellas signatarias de tal acuerdo, mantendrían su derecho de acudir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC de modo que fuera este foro el que decidiese a la luz de sus disposiciones. Una opción de esa naturaleza daría un procedimiento idóneo para evitar obstrucciones y retrocesos en la liberalización del comercio.

129. El representante de la India se refirió a la intervención de la delegación de los Estados Unidos en la reunión anterior en relación con este punto del programa de trabajo y dijo que los Estados Unidos habían dado a entender que la aplicación de sanciones comerciales podía justificarse en el contexto de los AMUMA porque eran vagos y amplios, difíciles de poner en práctica, podían no tomar en consideración todos los factores pertinentes y muchos de ellos podían no haber funcionado. La delegación del orador no podía aceptar el concepto de las sanciones comerciales fundadas simplemente en que existieran algunos problemas y cuestiones que se habían planteado con los AMUMA. Las sanciones comerciales originaban múltiples problemas para el sistema multilateral de comercio que eran mucho más difíciles de resolver que las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de un eventual AMUMA. Los Estados Unidos también habían partido del supuesto de que una solución *ex-ante* era absolutamente indispensable. El orador no consideraba que el Subcomité hubiese llegado ya a la etapa de las soluciones y su delegación, como muchas otras, estaba considerando todas las alternativas. Además, la intervención de los Estados Unidos se había referido a varios AMUMA en los que se contemplaba la idea de las sanciones comerciales cuando dieran efecto o aplicasen una norma existente en materia de medio ambiente que estuviese científicamente basada. También a este respecto la delegación del orador manifestaba sus preocupaciones y tendría que examinar la cuestión cuidadosamente.

130. El representante de Nueva Zelandia observó que, en la intervención de los Estados Unidos, se había señalado que la situación actual distaba mucho de satisfacer a los círculos empresariales y a las organizaciones ecologistas de ese país. Pero las apreciaciones negativas no debían ser, por sí solas, un fundamento para modificar las normas. El problema de la apreciación ponía de relieve el hecho de que este proceso contribuiría a mejorar la comprensión de los problemas, como había ocurrido en el Grupo MACI, de modo que la labor sustantiva pudiera basarse en un método de análisis cabal. Aunque su delegación estaba de acuerdo en que las medidas comerciales podían tener cabida en los AMUMA, con sujeción a disciplinas adecuadas, la afirmación de los Estados Unidos según la cual las medidas comerciales podrían ser adecuadas para "dar efecto o aplicar una norma internacional existente en materia de medio ambiente o de conservación que estuviese científicamente basada" planteaba

múltiples problemas. Su delegación pondría en tela de juicio la necesidad de las medidas comerciales en tales condiciones; o bien, si un AMUMA no sería posible en tales casos, y si no podría contemplarse un camino más adecuado para cualquier medida comercial. Su delegación vería con interés el desarrollo de esta cuestión.

131. El orador señaló que los Estados Unidos habían recordado las limitaciones de los AMUMA. Se preguntó, sin embargo, si esas limitaciones, por sí solas, hacían mermar en alguna forma la conveniencia de alcanzar un consenso multilateral sobre el empleo de medidas comerciales. Por ejemplo, qué relación guardaban esas supuestas limitaciones con las propias de las medidas unilaterales, como en lo relativo a la eficacia. Éstas eran algunas de las cuestiones que el orador se planteaba, y estimaba que sería útil que los Estados Unidos pudiesen aportar precisiones sobre esos puntos cuando el Comité volviera a examinar la cuestión el año siguiente.

132. El representante del Canadá consideraba que la base de la discusión sobre los AMUMA era el reconocimiento de que la única forma adecuada y eficaz de abordar los problemas ambientales en el plano internacional era a través de la cooperación multilateral. Su delegación no consideraba que las medidas comerciales constituyeran necesariamente un elemento regular de los AMUMA. No lo habían sido hasta el momento, y las medidas comerciales no eran realmente la mejor de todas las soluciones. Podrían, sin embargo, plantearse situaciones en el futuro en que se propusieran medidas comerciales. En tales casos, su delegación vería fundamentos en el principio básico de que, cuando la comunidad internacional hubiese decidido adoptar un AMUMA con amplio apoyo y participación, las normas del GATT no deberían constituir un obstáculo arbitrario a las disposiciones que en él pudieran figurar sobre el empleo de medidas comerciales. Su delegación estaba de acuerdo en la necesidad de estudiar la mejor forma de evitar eventuales conflictos entre tales disposiciones de un AMUMA y las obligaciones contraídas por sus partes en el régimen de la OMC.

133. Al apoyar los métodos multilaterales, su delegación también rechazaba firmemente las medidas de tipo unilateral. No consideraba que existiese fundamento alguno para que en la OMC se autorizase la utilización de sanciones comerciales unilaterales destinadas a aplicar programas o normas de protección del medio ambiente en forma extraterritorial. No correspondía que un país ni una minoría de países decidieran por los demás las medidas que éstos hubieran de aplicar internamente o sobre los bienes comunes de la humanidad. Debía existir acuerdo sobre lo que fuera preciso hacer. Un acuerdo multilateral podía no significar una participación del 100 por ciento. El umbral del apoyo que pudiera constituir un consenso internacional podría variar según los casos conforme a la naturaleza de los problemas y los programas que se utilizaran. Para cualquier criterio sobre la cabida que fuera a darse en los AMUMA a medidas comerciales que pudieran ser incompatibles con el GATT sería decisivo contar con un medio que permitiera reconocer los acuerdos que reflejasen un efectivo consenso internacional, y no sólo la naturaleza del proceso de negociación.

134. Preocupaba a la delegación del orador la propuesta de los Estados Unidos según la cual debería encontrarse en las normas del GATT/OMC el modo de permitir la utilización de restricciones comerciales por cualquier país para dar efecto o aplicar lo que se había calificado como "una norma internacional existente en materia de medio ambiente o de conservación que estuviese científicamente basada". ¿Cuál sería la naturaleza de tales "normas"? ¿Cómo se definiría ese concepto? No tratándose de un AMUMA que gozara de amplio apoyo y participación, ¿con qué fundamento podría afirmarse que algo constituyera efectivamente una norma? No existiendo acuerdo conforme a tal AMUMA sobre determinada medida comercial para darle efecto o aplicarla, ¿con qué fundamento podría autorizarse en la OMC su utilización? La delegación del orador estimaba que el ámbito de decisión sobre las medidas de aplicación de los programas ambientales convenidos internacionalmente se encontraba en los foros ambientales competentes durante el desarrollo y la negociación de los propios AMUMA. La OMC no era el lugar apto para formular tales juicios. En realidad, recurrir a la OMC para que autorizase la aplicación de sanciones comerciales en situaciones en que no existía acuerdo sobre el problema ni el programa ambiental

significaría asignar a la OMC una función de decisión de la política ambiental y un papel de árbitro entre los Miembros de la OMC sobre temas referentes a la política ambiental. Nada de eso correspondía a la OMC.

135. El rechazo de cualquier función de la OMC en cuanto a dar justificaciones *a posteriori* a los AMUMA había dado origen a la discusión sobre los enfoques *ex-ante* y *ex-post*, en la que algunas delegaciones habían insistido en favor del primero. El problema era que el otorgamiento de una excepción general *ex-ante* para cualquier medida incompatible con el GATT que pudiera adoptarse en relación con un AMUMA, aun antes de saberse en qué consistirían el AMUMA y la restricción comercial, equivaldría a entregar un cheque en blanco. Las delegaciones habían coincidido en general en que tal cosa no era conveniente. Debería existir un régimen razonable de frenos y contrapesos, ya fuera mediante la fijación de criterios claros sobre los tipos de medidas que serían aceptables o a través de un procedimiento de exención que tuviese algunos mecanismos de control.

136. En una etapa adecuada de los trabajos sería preciso examinar más detenidamente los métodos posibles. Con respecto a la cuestión del procedimiento de las excepciones, para su delegación el objetivo no era someter el AMUMA mismo, ni sus objetivos ambientales, a disposiciones de control en la OMC. Lo que debía examinarse eran las medidas comerciales concretas fundadas en el AMUMA en el contexto de los derechos y obligaciones que los gobiernos habían contraído en el GATT. Esos derechos y obligaciones no podían tomarse a la ligera ni dejarse a un lado sin los procedimientos debidos. Por esta razón sería necesario conocer qué cosas se exonerarían de las normas, y con qué fundamentos. Ello requeriría el examen individual de las solicitudes de excepción respecto de las medidas comerciales establecidas formal y concretamente en un AMUMA que reflejara un amplio consenso internacional sobre el programa medioambiental y su aplicación. Llegado el momento podrían discutirse diversas alternativas. Sin embargo, deberían realizarse trabajos analíticos más completos sobre los AMUMA, así como sobre los demás puntos del programa de trabajo, antes de que el Subcomité estuviera en condiciones de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza y el alcance de los problemas que tenían que abordarse y sobre la mejor forma de actuar a su respecto.

137. El representante del Brasil dijo que la cuestión de las relaciones entre los AMUMA y el sistema multilateral de comercio tenía gran importancia. Puesto que los responsables de la política ambiental habían estimado necesario, en ciertos casos, adoptar medidas comerciales a nivel internacional con fines de protección del medio ambiente, podían plantearse efectivamente problemas de compatibilidad. A pesar de que no habían surgido problemas concretos, sería útil procurar una mayor certidumbre y una mejor orientación tanto para los responsables de la política de protección del medio ambiente como para los de la política comercial. Los análisis ya realizados en el Grupo MACI permitían advertir que algunas medidas comerciales que podrían ser contrarias al GATT, adoptadas en el contexto de los AMUMA, podrían encontrar justificación en el artículo XX, como por ejemplo las restricciones cuantitativas aplicadas con criterio NMF que pudieran cumplir los requisitos de las excepciones de los apartados b) o g) del artículo XX. Pero también era posible encontrar por lo menos dos situaciones fundamentales en que la aplicación directa del artículo XX plantearía problemas: la utilización de medidas comerciales para imponer PMP en forma extrajurisdiccional y el empleo de medidas comerciales discriminatorias contra terceros no participantes.

138. En el caso de las situaciones que acaso fuesen compatibles con el artículo XX, sería conveniente dar seguridades a quienes albergaban temores porque el artículo no se refería explícitamente a las medidas ambientales, reafirmando al mismo tiempo los principios básicos conforme a los cuales funcionaban esas excepciones de las normas generales del GATT. En los casos en que no pudiera aplicarse directamente el artículo XX, debería encontrarse una solución para evitar problemas en el funcionamiento de los acuerdos sobre el medio ambiente verdaderamente multilaterales. Antes de examinar las posibles soluciones, tendrían que reconocerse por todos algunas premisas básicas; la delegación del orador

consideraba que las deliberaciones llevadas a cabo apuntaban a una amplia coincidencia sobre los tres puntos siguientes:

- i) El GATT/OMC no era una institución rectora en materia de medio ambiente y por lo tanto debía evitar la discusión sobre las alternativas de la política ambiental y la eficacia comparativa de las medidas incluidas en los AMUMA. Aunque el comercio representaba un aspecto del desarrollo sostenible, las medidas de protección del medio ambiente sólo constituirían materia propia del sistema multilateral de comercio en la medida en que los AMUMA utilizaran para la protección del medio ambiente medidas comerciales en el plano internacional.
- ii) Para que las consecuencias de los AMUMA pudieran ser asimiladas adecuadamente en el sistema multilateral de comercio era fundamental que correspondiesen a un verdadero consenso internacional, alcanzado en los ámbitos de negociación competentes sobre el medio ambiente. Sería perjudicial para la OMC que se viera ante un esfuerzo por dar legitimidad a medidas comerciales incompatibles con el GATT adoptadas en un AMUMA que no tuviera el respaldo de un consenso internacional, ya que no cabía esperar que tal consenso se alcanzara en el GATT. Al mismo tiempo sería inadmisible que se utilizaran los AMUMA como instrumentos para imponer a otros países, a través del comercio, un comportamiento deseado por un solo país o unos pocos. El multilateralismo no podía utilizarse para legitimar el unilateralismo.
- iii) Con el fin de reducir los posibles problemas, debería destacarse en los foros dedicados al medio ambiente el principio de que los problemas ecológicos deben abordarse en sus raíces, reduciendo la utilización de restricciones comerciales a lo realmente necesario.

139. En anteriores discusiones del GATT sobre esta cuestión, la delegación del orador había apoyado la idea de estudiar una solución que siguiera los lineamientos de una interpretación del artículo XX, incluyendo en última instancia una presunción de conformidad de los AMUMA que cumplieran ciertos requisitos, y había apoyado la orientación general de la propuesta formulada en el Grupo MACI por las Comunidades Europeas. Su delegación no descartaba otras propuestas, y señalaba que se había sugerido que se estudiaran otros enfoques, como los basados en el párrafo 5 del artículo XXV o en el apartado h) del artículo XX. El apoyo de su delegación a la interpretación del artículo XX se basaba en dos aspectos principales que deberían estar presentes en cualquier solución que se propusiera. En primer lugar, la solución debía incentivar claramente el procedimiento multilateral para tratar los problemas ambientales de naturaleza transfronteriza estableciendo una orientación clara sobre las relaciones entre los AMUMA y el sistema multilateral de comercio. De este modo podía considerarse que un verdadero AMUMA, aunque llevaría considerable tiempo, ofrecería una solución no controvertida y con mejores perspectivas de éxito. Tal orientación no chocaría con las opciones ecológicas de los redactores del AMUMA, sino que se referiría a las condiciones de utilización de las restricciones comerciales. Para lograr esos objetivos, el segundo aspecto consistía en que la solución debería ser *ex-ante*.

140. A este respecto hacía falta analizar por lo menos cuatro temas:

- i) harían falta criterios para definir el carácter multilateral de los acuerdos, lo que requeriría el análisis de los siguientes aspectos: el carácter abierto del proceso de negociación y el papel del patrocinio de las Naciones Unidas; la participación de productores y consumidores, cuando fuera pertinente; la diversidad de los niveles de desarrollo y de la distribución geográfica de los participantes; y la cuestión de los

acuerdos regionales para examinar el procedimiento aplicable a los eventuales efectos comerciales en países ajenos a la región;

- ii) sería preciso desarrollar criterios sobre lo que se había calificado como "cuestión de la especificidad" para evitar la utilización de los AMUMA como justificación de medidas unilaterales: los AMUMA deberían ser precisos en cuanto a las medidas comerciales que hubieran de adoptarse en virtud de sus disposiciones, así como respecto de las condiciones de su adopción;
- iii) alguna forma de garantía de la aplicabilidad de las restricciones comerciales de los AMUMA a los intercambios entre las partes, conforme a las normas propias del AMUMA, para justificar su aplicación a los no participantes, y la determinación de si tales disposiciones supondrían procedimientos de arreglo de diferencias en el AMUMA;
- iv) la viabilidad de la distinción, sugerida en la propuesta de las Comunidades Europeas, entre las medidas comerciales discriminatorias necesarias para lograr los objetivos del AMUMA y las sanciones punitivas destinadas a forzar a un país a adherirse a un AMUMA, sin entrar en la discusión ecológica sobre los métodos y objetivos escogidos por él.

141. La declaración formulada por su delegación no tenía el propósito de introducir nuevos aspectos o propuestas en el debate, ni respondía a comentarios formulados en la reunión precedente, sino que indicaba su posición respecto de los principales aspectos de la deliberación. Su delegación confiaba en que sus propuestas podrían coincidir con las opiniones básicas de muchas delegaciones.

142. El representante de Australia señaló que su exposición tenía el propósito de exponer algunas reflexiones sobre la deliberación de la reunión anterior acerca del tema. En particular señaló cinco puntos importantes que parecían surgir de la discusión: sólo un número reducido de AMUMA contenían disposiciones comerciales; muchas de las disposiciones comerciales incluidas en esos pocos AMUMA podían ser perfectamente compatibles con las normas multilaterales de comercio; el GATT siempre había reconocido la existencia de ciertos objetivos superiores de orden público y les había dado cabida en las excepciones generales del artículo XX. Por consiguiente, no parecía que se originaran problemas para el sistema multilateral de comercio, en principio, por el hecho de que se hiciera lugar en las normas multilaterales de comercio a medidas comerciales adoptadas con arreglo a un AMUMA para lograr objetivos superiores de orden público. Sin embargo, también debía destacarse que el artículo XX imponía diversas disciplinas cuidadosamente definidas para la aplicación de medidas comerciales adoptadas con el fin de lograr los objetivos superiores de orden público contemplados por el artículo XX.

143. La utilización unilateral de medidas restrictivas del comercio planteaba problemas fundamentales al sistema multilateral y a sus principios básicos de estímulo de la cooperación mutuamente ventajosa entre los países en las cuestiones comerciales. Por el contrario, no debería existir contradicción intrínseca entre la cooperación internacional en materia de comercio y la cooperación internacional en otras esferas como el medio ambiente, ya que tanto el sistema multilateral de comercio como los AMUMA se basaban en la misma búsqueda de soluciones equitativas y de cooperación para problemas de interés mundial. La dificultad consistía en asegurar que la cooperación internacional en cada materia fuese compatible con la cooperación internacional en otras, y ambas se apoyaran mutuamente.

144. La discusión había puesto de relieve y en contraste los criterios *ex-ante* y *ex-post* para dar cabida en las normas multilaterales de comercio a las medidas comerciales adoptadas al amparo de los AMUMA. Sin embargo, las delegaciones de la Argentina y Corea habían señalado la posibilidad de un enfoque combinado que reuniera los aspectos positivos de ambos criterios. A este respecto tal vez fuera

conveniente señalar el enfoque basado en el apartado h) del artículo XX y su nota interpretativa sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de acuerdos intergubernamentales sobre productos básicos. Era interesante señalar que este enfoque combinaba distintos medios para la aceptación de tales medidas en tres casos diferentes: si las medidas se habían tomado con arreglo a acuerdos que se ajustaban a un conjunto de principios aprobados por el Consejo Económico y Social en 1947; si las medidas se habían tomado en virtud de acuerdos que se ajustaban a los criterios sometidos a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobados por ellas; y si las medidas figuraban en acuerdos sometidos a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobados por éstas. Una parte de las deliberaciones de la reunión anterior parecía sugerir la necesidad de optar entre los enfoques *ex-ante* y *ex-post*, lo que suponía un repertorio de posibilidades como en el caso del apartado h) del artículo XX o que, por lo menos, combinase el empleo de criterios genéricos que abarcarían ciertas situaciones con una disposición sobre el examen caso por caso en otras.

La reflexión sobre estos temas podría ayudar a captar más exactamente las dimensiones precisas del problema. La delegación del orador sugería que las siguientes observaciones merecerían examinarse más detenidamente:

- i) podría ocurrir que las situaciones en que fueran necesarias medidas comerciales para el logro de objetivos ambientales de un AMUMA fueran relativamente poco numerosas;
- ii) aun en los casos en que un AMUMA contuviera medidas comerciales, podría haber un margen importante para lograr el objetivo ambiental respectivo a través de medidas que fueran totalmente compatibles con las normas multilaterales de comercio;
- iii) podría ser limitado el número de los AMUMA, y también la gama de las medidas comerciales, a los que fuera preciso dar cabida en las normas multilaterales de comercio como medidas excepcionales destinadas a atender ciertos objetivos superiores de orden público, por lo que tal vez fuese posible desarrollar un conjunto de directrices o criterios bastante específicos para tratar esas situaciones adoptando, al mismo tiempo un enfoque previsor para asegurar que las directrices o criterios fueran suficientemente flexibles para resolver un conjunto de situaciones diversas.

145. El representante de Hong Kong consideró que sería útil que se mantuviera un diálogo regular sobre este punto porque a juicio de su delegación se trataba de un tema en el que el Subcomité podría alcanzar resultados rápidamente y enviar una señal positiva al mundo de la ecología. Con respecto a una cuestión planteada por el representante de la India, y antes por el representante del Canadá, sobre el empleo de sanciones comerciales en apoyo de los AMUMA, era un hecho fundamental que en virtud del GATT los gobiernos habían desistido de ese derecho en relación con las demás partes contratantes. Puesto que no existía el derecho de emplear sanciones comerciales, se deducía que éstas tendrían que encontrar fundamento en las normas de excepción del GATT. Con respecto a las reglas sobre la carga de la prueba, siempre que se recurría a las normas de excepción la jurisprudencia del GATT determinaba que debían interpretarse del modo más estricto y que la carga de la prueba siempre recaía en quien las invocara. Esto cambiaría si se aplicase el enfoque *ex-ante* en lugar del enfoque *ex-post*. Con respecto a la observación formulada por el representante de Colombia sobre el derecho a recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias, señaló que ese era un derecho conforme al GATT y aseguraba a los gobiernos la estabilidad y previsibilidad del sistema multilateral de comercio. Tal derecho no podría renunciarse fácilmente, por lo que un enfoque *ex-ante* sería sumamente radical si suponía la entrega de un cheque en blanco de cualquier clase.

146. Por otra parte, con respecto a la referencia hecha por la delegación de Suecia al principio de precaución, ampliamente reconocido en la esfera ecológica, señaló que era intrínsecamente contradictorio con lo que había llegado a conocerse con el nombre de principio de necesidad. El Subcomité tendría

que volver a examinar esta cuestión para determinar dónde podría encontrarse un punto de equilibrio. El orador se adhirió a las afirmaciones de Nueva Zelandia y el Canadá en el sentido de que el Subcomité, cualesquiera que fuesen los trabajos que se realizasen, no debería tratar de dar cabida en el GATT a medidas unilaterales o extraterritoriales. Esto tendría que manejarse cuidadosamente y estudiándolo caso por caso. El objetivo debería ser doble: ofrecer cierto incentivo a las soluciones multilaterales de los problemas mundiales o transfronterizos, y no alentar el empleo de medidas comerciales en los AMUMA, en especial las que fueran incompatibles con el GATT. El orador señaló su interés por las intervenciones de los representantes de Australia y el Brasil. Su delegación no insistía en que debiera existir un único enfoque: podría haber un híbrido de las distintas posibilidades, pero el Comité debería actuar con cautela y no entrar prematuramente en la etapa de la determinación de soluciones.

147. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación volvería a referirse sin duda a algunos de los argumentos expuestos y de las cuestiones planteadas, no sólo a principios del año siguiente sino también en forma permanente. Un análisis serio de los AMUMA y de las diversas opciones que se habían expuesto exigiría un estudio y un comentario más detallados. También requeriría un mejor conocimiento y comprensión de los antecedentes de los AMUMA, en particular del proceso de su elaboración, reconociendo que los negociadores de esos acuerdos no habían considerado el empleo de medidas comerciales una solución de su preferencia, como podría deducirse de los textos, sino que habían dedicado al tema el debido estudio y reflexión. En la medida en que esas negociaciones habían desembocado en la decisión de la necesidad de tales medidas comerciales y sus perspectivas de eficacia (decisión que se había adoptado como parte de un acuerdo más general sobre objetivos ambientales), debería haber cierto respeto por esa decisión y el conjunto que integraba. Ésta era una de las razones en que se fundaba la preferencia de su delegación por el enfoque *ex-ante*. Sin embargo, era importante examinar todas las ideas y sus consecuencias, según habían sido expuestas o se expusieran más adelante. También era importante reconocer que entre los AMUMA existían diferencias. Las medidas comerciales no siempre desempeñaban la misma función en ellos, y esto podría tener importancia al examinar las posibles soluciones.

148. En su intervención de la reunión anterior, su delegación había hablado de medidas comerciales y no de sanciones. Se habían hecho numerosas referencias a las sanciones y al unilateralismo, y el orador consideraba que algunos países aplicaban los mismos conceptos que parecían rechazar en el Subcomité. Era importante comprender que el unilateralismo se manifestaba en múltiples formas y aspectos. El unilateralismo podía consistir en que un país decidiera por sí sólo las condiciones del acceso a los mercados para ciertos productos en forma que dejaba en desventaja a los extranjeros por causa del contenedor en que sus productos exportados se presentaban en la frontera. Podía tomar la forma de que un país decidiera por sí sólo administrar conceptos sobre la preservación del medio ambiente más allá de sus fronteras a través de medidas que no eran de naturaleza comercial pero que no por eso dejaban de ser unilaterales. Existía toda clase de medios a través de los cuales los países actuaban unilateralmente en sentido formal, si la única alternativa era adoptar medidas al amparo de un AMUMA. En realidad, la aplicación de los AMUMA hacía necesarias medidas nacionales para ponerlos en práctica. De este modo, la reflexión sobre estas cuestiones exigía cuidado. El orador comprendía la sensibilidad que despertaba el unilateralismo y destacó que su delegación, en su intervención anterior, no había hablado de sanciones. Pero consideraba que debían examinarse las variadas situaciones que darían origen al empleo de medidas comerciales, a veces en aplicación de un AMUMA reconocido y a veces conforme a normas que podrían no constituir necesariamente un AMUMA en opinión de todos, pero que tenían cierto grado de legitimidad internacional.

149. El representante del Japón declaró que su delegación no podía compartir el enfoque de los Estados Unidos sobre esta cuestión. El empleo de medidas comerciales en los AMUMA, así como las medidas unilaterales, planteaban diversos problemas que merecían un análisis serio y detenido en el Subcomité. El orador compartió las inquietudes manifestadas por los representantes de Nueva Zelandia, el Canadá y Australia y apoyó la intervención del Brasil. Los AMUMA no debían utilizarse como pretexto para

medidas unilaterales ni con fines proteccionistas. Su delegación desearía que este tema siguiera estudiándose más cuidadosamente y no en forma apresurada, para llegar a una conclusión satisfactoria.

150. El representante de las Comunidades Europeas manifestó su interés por las sugerencias de varias delegaciones sobre la existencia de una variada gama de enfoques intermedios entre el totalmente *ex-ante* y el totalmente *ex-post*. Su delegación había expresado inequívocamente su preferencia por el enfoque *ex-ante*. Tal cosa no significaba que dejara de examinar con atención las interesantes ideas que se habían expuesto. Señaló que su delegación nunca había considerado que el enfoque *ex-ante* fuera un simple cheque en blanco. Los AMUMA tendrían que cumplir ciertas condiciones relativas al carácter abierto de su negociación y al grado de participación, particularmente de los países productores. Asimismo, cuando los AMUMA dispusieran ciertas medidas sin especificar exactamente cuáles, si dejaban un margen amplio de discrecionalidad en la aplicación de las medidas, incluidas las medidas comerciales, tendría que poder examinarse cómo se relacionaban las medidas comerciales concretas de aplicación del AMUMA con los criterios del GATT, como el no otorgamiento de protección a la producción nacional y los incluidos en la introducción del artículo XX.

151. Con respecto a lo manifestado por el representante de Hong Kong en el sentido de que la carga de la prueba debía recaer en las partes en los AMUMA, el orador señaló la intervención de Australia referente al apartado h) del artículo XX. Esta disposición se refería a la presentación de acuerdos que podían cumplir condiciones previamente convenidas u otras interpretaciones, como la de que los acuerdos tendrían que ser expresamente desaprobados por las PARTES CONTRATANTES y los futuros Miembros de la OMC, o de que la carga de la prueba no recaería necesariamente en las partes en esos acuerdos sobre productos básicos. Su delegación veía con satisfacción la intervención del representante del Brasil y le interesaba el tercer punto planteado en ella, sobre la garantía de aplicabilidad de las restricciones comerciales establecidas en los AMUMA a los intercambios entre las partes. Esta cuestión, que no se había planteado anteriormente, merecía un examen más completo.

152. La representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, destacó que no había oído a ninguna delegación que propugnara la entrega de un cheque en blanco a los negociadores de los AMUMA. Para que pudieran examinarse las alternativas posibles era importante tener una visión clara de su naturaleza. Su delegación consideraba que el enfoque *ex-ante* contendría ciertos criterios que determinasen las condiciones para que los AMUMA pudiesen dar lugar a excepciones en el régimen del GATT. Podrían ser parámetros aplicables al grado de representación mundial, la medida de la participación de los países interesados en el tema respectivo, la circunstancia de que el AMUMA estuviese abierto a la adhesión de todos los gobiernos, etc. Otro aspecto importante era el grado en que las medidas comerciales tendrían que especificarse en los AMUMA. Un requisito mínimo importante era que los AMUMA establecieran la necesidad de medidas comerciales y su vinculación con el problema ambiental. También tendrían que determinarse criterios que establecieran la base de las exigencias que el GATT/OMC aplicaría a las medidas previstas. Los criterios deberían incluir conceptos como los de la menor restricción comercial, la eficacia y otros similares. De este modo se daría orientación a los negociadores de los AMUMA y a los gobiernos nacionales que hubieran de aplicarlos.

153. El representante de la Argentina señaló que su delegación había expuesto en la reunión anterior una propuesta que procuraba conciliar dos enfoques diferentes. Consideraba de sumo interés la propuesta de la delegación de Australia formulada en esta reunión y deseaba insistir en el examen de las posibilidades de aplicar el apartado h) del artículo XX. Preocupaba a su delegación que, después de todos los esfuerzos realizados para determinar cómo habrían de tratarse las disposiciones o cláusulas comerciales incluidas en los AMUMA, se asegurara que cuando se abriese alguna ventana no se deslizarían por ella medidas proteccionistas. Se habían planteado numerosas ideas, incluso la de que podrían adoptarse medidas unilaterales. Esto último no contribuía al adelanto de las deliberaciones. El unilateralismo existía y siempre constituía una posibilidad, pero en los hechos tenía que determinarse dónde estaba la externalidad ambiental. ¿Estaba en un mercado, en una jurisdicción, o dónde se

encontraba? Si estaba dentro de una jurisdicción, era evidente que podrían adoptarse medidas unilaterales dentro de ciertos límites. Las externalidades fuera de una jurisdicción y en varias jurisdicciones o mercados y las que afectarían a los bienes comunes de la humanidad eran las que se tenían en cuenta al discutirse los AMUMA. Respecto de esas externalidades tenía que adoptarse una actitud de cooperación. Era respecto de este criterio que su delegación proponía un enfoque flexible que conciliase la previsibilidad del enfoque *ex-ante*, respetara las decisiones adoptadas por los negociadores del acuerdo ambiental, y al mismo tiempo evitara cualquier cheque en blanco y ofreciera la flexibilidad de un análisis caso por caso a la luz de las medidas concretas que se hubiesen adoptado.

154. Su delegación, francamente, no quería dar flexibilidad y al mismo tiempo permitir el unilateralismo; tendría que ser lo uno o lo otro. Su delegación desearía que el unilateralismo fuese dejado a un lado. Para poder avanzar y llegar a alguna etapa en que pudiera comenzar a elaborar normas, el Subcomité debería llegar a un acuerdo y entendimiento sobre un desistimiento inequívoco de las medidas unilaterales cuando existieran externalidades que afectasen a más de un mercado o jurisdicción. Esas situaciones debían abordarse con una actitud de cooperación. De ese modo, la cooperación y la flexibilidad debían ser las alternativas del unilateralismo.

Punto 3 del programa de trabajo

155. El Presidente se refirió a una publicación presentada por la delegación del Reino Unido, titulada "Making Markets Work for the Environment". Había sido editada en 1993 por el Departamento del Medio Ambiente del Reino Unido, y en ella se examinaban en detalle seis tipos de instrumentos económicos: los cargos por emisión, los permisos negociables, los impuestos a los productos, los sistemas de pago y reembolso de envases, la responsabilidad legal y las subvenciones. El documento estudiaba su funcionamiento, su aplicación y sus formas de fiscalización.

156. El representante de la Argentina se refirió a la reunión del Grupo de Trabajo Especial de la UNCTAD sobre comercio, medio ambiente y desarrollo ambiental, que trataría especialmente el etiquetado ecológico y los productos inocuos para el medio ambiente. Sería útil que el Subcomité pudiera dar alguna indicación sobre lo que esperaba de esos trabajos. Sería una forma de promover la cooperación entre las organizaciones intergubernamentales. El orador observó que la exposición de los Estados Unidos sobre el etiquetado ecológico (PC/SCTE/W/5) mencionaba numerosas cuestiones y problemas que deberían analizarse en relación con el etiquetado ecológico. Planteaba una serie de cuestiones sobre las que sería útil contar con el aporte de otras organizaciones que pudieran abordar los detalles más técnicos. Por ejemplo, el orador destacó los puntos expuestos en la sección IV:B del documento, a cuyo respecto serían útiles las contribuciones de otras organizaciones, particularmente en relación con la justificación ecológica de las medidas. El Subcomité debería contar con información completa sobre las deliberaciones referentes al comercio y el medio ambiente que se desarrollaran en otros lugares.

157. El representante del Brasil observó que en la reunión de septiembre del Subcomité algunas delegaciones habían manifestado dudas sobre la relación entre los sistemas de etiquetado ecológico y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Con el fin de contribuir a ese debate, su delegación presentó un análisis preliminar del problema realizado principalmente a la luz del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio resultante de la Ronda Uruguay. El tema abarcaba dos cuestiones principales: por un lado, el análisis de la forma en que los sistemas complejos de etiquetado ecológico cabían en el alcance del Acuerdo y, por otro lado, determinar el nivel de las obligaciones resultantes según la naturaleza del sistema (obligatorio o no obligatorio, gubernamental o no gubernamental).

158. El establecimiento de un sistema de etiquetado ecológico suponía en la mayoría de los casos tres actividades: la fijación de normas o reglamentos técnicos sobre procesos y productos, la fijación

de una norma o reglamento técnico sobre etiquetado, y la fijación de un procedimiento de evaluación de la conformidad. El etiquetado ecológico, por lo tanto, se refería al mismo tiempo a una etiqueta, a un conjunto de normas y a un procedimiento de evaluación de la conformidad. La circunstancia de que los sistemas de etiquetado ecológico contuvieran prescripciones tanto sobre las características de los productos como sobre los PMP daba origen a la mayor parte de las discusiones sobre la relación entre el etiquetado ecológico y las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. La discusión sobre comercio y medio ambiente ponía en primer plano la polémica sobre la validez de la aplicación a las importaciones (con el consiguiente efecto en el comercio internacional) de reglamentaciones que distinguían entre los productos sobre la base de sus PMP, aunque no se reflejasen en las características del producto final. El orador, aunque sin entrar en esa discusión, recordó que se había impugnado enérgicamente, desde el punto de vista ecológico y comercial, la pertinencia de que se exigiera a los productores extranjeros adoptar un comportamiento ecológico que tomara en consideración condiciones internas del país.

159. En consecuencia, algunos parecían poner en duda la aplicabilidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio al etiquetado ecológico con el fin de no legitimar las distinciones comerciales entre productos sobre la base de los PMP que no se reflejaban en las características del producto final (PMP no relacionados con los productos). Según este punto de vista, si esos PMP se consideraban abarcados por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se originaría el peligro de que ello se interpretase en el sentido de que el GATT "reconocía", y por consiguiente "permitía", el empleo de restricciones de la importación sobre la base de los PMP no relacionados con los productos. Más concretamente, si su utilización se consideraba sujeta a la disciplina del trato nacional, ello podría interpretarse indebidamente en el sentido de que se permitía su aplicación a las importaciones (ajuste en la frontera), en tanto que la producción nacional también estaba sujeta a las mismas prescripciones sobre los PMP. Existía, sin embargo, un reconocimiento general de que las normas del GATT se aplicaban a los productos y aseguraban el acceso de los productos al mercado con independencia de sus condiciones de producción, y la delegación del orador seguía considerando que ello constituía una característica esencial del sistema multilateral de comercio.

160. Despertaba más preocupación el hecho de que algunos parecieran poner en tela de juicio la aplicabilidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio al etiquetado ecológico simplemente para evitar toda disciplina en su utilización. El acuerdo correspondiente de la Ronda de Tokio excluía claramente de su alcance a los PMP, independientemente de su relación con el producto. A pesar de estar excluida de las definiciones de las normas y los reglamentos técnicos, la cuestión estuvo en el centro de una de las pocas diferencias que se habían suscitado: la controversia sobre la directiva de la CE que había prohibido la importación de carnes de animales tratados con hormonas. Ese era el asunto que había estado presente en el ánimo de los negociadores del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio cuando se formularon las primeras propuestas de incluir en él los PMP. Por lo tanto, la inclusión de ciertos PMP en el alcance del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio respondía a una preocupación sobre los PMP que afectarían a las características finales de los productos. En consecuencia, en las definiciones de las normas y los reglamentos técnicos que se encontraban en el Anexo 1 del nuevo Acuerdo figuraba el concepto de la relación con el producto.

161. Su primera conclusión era, entonces, que en la medida en que los sistemas de etiquetado ecológico crearan normas (si eran voluntarios) o reglamentos técnicos (si eran obligatorios) que estipularan características de los productos o los PMP relacionados con esas características de los productos, quedaban sujetos a las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y los órganos que elaboraban esas normas o reglamentos técnicos debían considerarse instituciones con actividades de normalización. Así ocurría, por ejemplo, si creaban sus propias normas sobre la definición de la degradabilidad de un producto en lugar de utilizar las ya existentes. No ocurría lo mismo si el sistema creaba una norma en materia de emisiones de azufre que no se relacionara con el producto. Era interesante señalar que el Acuerdo, al no tratar de reglamentar lo que estaba más allá del producto,

reflejaba una preocupación por no lesionar las prerrogativas de cada país en cuanto a establecer las normas aplicables a los procesos que considerase más adecuadas a las condiciones nacionales, incluido el nivel de los riesgos socialmente aceptables. La inadmisibilidad de que se diferenciaron los productos sobre la base de los PMP no era más que una contrapartida de esa prerrogativa.

162. En segundo lugar, un sistema de etiquetado ecológico siempre creaba determinada norma o reglamento técnico sobre las etiquetas que debían colocarse en los productos para satisfacer sus prescripciones (la definición de su formato, colores, etc.). Aunque ésta habría de ser la parte más visible del sistema, no debía generar grandes dudas, puesto que el etiquetado estaba mencionado expresamente en las definiciones de las normas y reglamentos técnicos del Acuerdo. La segunda conclusión, por lo tanto, era que la formulación de las características de las etiquetas estaba sujeta a las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En tercer lugar, el etiquetado ecológico era un procedimiento de evaluación de la conformidad. Se habían establecido reglas, métodos y procedimientos para asegurar que los productos se ajustaran a las prescripciones y tuvieran derecho a utilizar la etiqueta establecida por el sistema. Los procedimientos de evaluación de la conformidad, que estaban alcanzados por disciplinas especiales en el nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, estaban definidos en términos amplios en su Anexo 1.

163. Tras haber expresado su opinión sobre la cuestión del alcance de las medidas, el orador se refirió al tema del nivel de las disciplinas. En el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se había procurado un equilibrio entre la amplitud con que se abordaban los problemas en la esfera de las normas y la creación de formas de aplicación viables tanto desde el punto de vista del funcionamiento práctico, como los mecanismos de notificación, como también en cuanto a las limitaciones jurídicas o políticas, por ejemplo en los Estados federales. El resultado era la existencia de distintos niveles de obligaciones para las instituciones del gobierno central, las instituciones públicas locales y las instituciones no gubernamentales, así como diferentes obligaciones, especialmente en materia de notificaciones, según el carácter obligatorio o voluntario del instrumento. El nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio había tratado de acortar las distancias entre esos distintos niveles o de fortalecer la responsabilidad que en última instancia cabría a los signatarios por la aplicación de las disciplinas en todos los niveles. La creación de un código de conducta para las instituciones con actividades de normalización se orientaba en esa dirección, así como, por ejemplo, la obligación de los Miembros de "adoptar las medidas razonables que estén a su alcance" para asegurar que tanto las instituciones gubernamentales como las no gubernamentales cumplieran las disciplinas básicas de los procedimientos de evaluación de la conformidad, con excepción de las notificaciones.

164. Los sistemas de etiquetado ecológico eran habitualmente voluntarios y, en la mayoría de los casos, no gubernamentales. Pero incluso en los sistemas no gubernamentales los gobiernos tenían una participación importante en su aplicación y promoción. Por lo tanto, existía el deber de adoptar medidas razonables para asegurar que se ajustasen a las disciplinas básicas como la no discriminación y el trato nacional, así como de utilizar de preferencia las normas internacionales, o las disciplinas de procedimiento sobre el acceso a los procedimientos de evaluación de la conformidad y el funcionamiento de esos procedimientos que se establecían en el artículo 5. También las normas, aunque no estuvieran sujetas a los mismos requisitos de transparencia que los reglamentos técnicos, en particular respecto de las notificaciones, estaban sujetas a requisitos de transparencia, entre ellos el suministro de informaciones mediante servicios de información. Podían surgir algunas dudas respecto de los procedimientos voluntarios de evaluación de la conformidad: el texto del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se refería a "los casos en que se exija una declaración positiva de conformidad", lo que parecía bastante general y de alcance global, mientras que el párrafo 5.6, al referirse a las notificaciones, no contenía tales limitaciones y aludía simplemente a "un procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto". Esto significaba que un sistema voluntario de etiquetado ecológico aplicado por una institución del gobierno central estaba sujeto, por ejemplo, a todas las obligaciones de transparencia establecidas por el Acuerdo, incluida la obligación de notificar.

165. Era innegable que el nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio no había sido elaborado pensando en los sistemas de etiquetado ecológico. En particular, el nuevo Acuerdo quedó prácticamente completado hacia 1990, antes de iniciarse las deliberaciones formales sobre comercio y medio ambiente en el GATT. La discusión, por lo tanto, distaba mucho de estar cerrada, sobre todo respecto de las consecuencias del análisis del ciclo de vida que utilizaba normas sobre procesos. El Subcomité debería seguir examinando la cuestión incluyendo, como lo habían propuesto algunas delegaciones en la reunión de septiembre, el estudio de la posibilidad de complementar el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de etiquetado ecológico. Mientras tanto, los gobiernos deberían asegurar que las disciplinas actuales, aunque no eran demasiado exigentes, fueran observadas estrictamente. Su delegación había sido informada recientemente de que la Comisión de las Comunidades Europeas había aprobado los criterios para el etiquetado ecológico de ciertos productos de papel que su delegación había criticado en el pasado. Observaba con pesar que, aunque el actual Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ya contenía requisitos de notificación para los sistemas de certificación, el sistema de etiquetado ecológico de la CE no había sido notificado. También lamentaba que los criterios en cuestión determinarían el otorgamiento de la etiqueta ecológica de la CE para los productos respectivos, a pesar de que su elaboración no se había ajustado a los requisitos de transparencia que la propia Comisión había establecido recientemente. El orador añadió que con ello ciertamente no se beneficiaría el crédito del sistema.

166. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación estudiaría la declaración del Brasil. Consideraba, sin embargo, que la interpretación del alcance y las obligaciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y las consecuencias respectivas eran asuntos de competencia de las partes en ese Acuerdo.

167. El representante de las Comunidades Europeas dijo que estudiaría las declaraciones formuladas en esta reunión acerca del punto. Coincidió con el representante de Nueva Zelandia en que el Subcomité probablemente no fuera el ámbito adecuado para adoptar decisiones definitivas sobre el alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Destacó que el sistema de etiquetado ecológico de la CE era un sistema voluntario por el que se podían otorgar etiquetas; no constituía una restricción formal de las importaciones. El sistema se aplicaba sobre la base de los criterios de la nación más favorecida y del trato nacional. Por otra parte, como ya lo había manifestado su delegación, la CNUMAD había reconocido específicamente la importancia de que se diera información adecuada a los consumidores sobre los problemas ambientales. Por último, su delegación estaba dispuesta a estudiar en el Subcomité, sin perjuicio de la cuestión del alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el problema de la relación entre la adecuada transparencia y la fijación de los criterios del etiquetado ecológico.

168. El representante de los Estados Unidos señaló igualmente que su delegación reflexionaría sobre la declaración del Brasil. Compartía algunas de las preocupaciones que había manifestado esa delegación sobre la evolución del sistema de etiquetado ecológico en la CE. Era muy posible que el Subcomité no fuese el ámbito adecuado para establecer interpretaciones definitivas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; existían, sin embargo, cuestiones relacionadas con el medio ambiente que derivaban de iniciativas vinculadas con el etiquetado ecológico y que se relacionaban con ese Acuerdo. El Subcomité tenía el mandato de examinar la conformidad de las disciplinas vigentes con el sistema multilateral de comercio al tratar diversos tipos de asuntos. El orador consideraba adecuado, por lo tanto, que el Subcomité examinase las clases de asuntos que surgieran en el desarrollo de los sistemas de etiquetado ecológico, a muchos de los cuales se había referido su delegación en su documento, y algunos de los cuales habían sido mencionados concretamente por la Argentina.

169. El Presidente tomó nota de las observaciones formuladas. Reiteró su invitación a las delegaciones a que con carácter voluntario presentaran a la Secretaría, para su recopilación, información que reflejara

su experiencia nacional con respecto a las medidas comprendidas en el tercer punto del programa de trabajo. Señaló que la Secretaría sólo había recibido hasta el momento dos respuestas a esa invitación.

170. El Presidente dio cuenta a continuación de que había proseguido las consultas sobre la cuestión de las disposiciones adecuadas con organizaciones no gubernamentales. Esas consultas no habían llegado todavía a una etapa de conclusiones. El Presidente tenía entendido que las delegaciones estaban realizando consultas entre ellas. Expresó la esperanza de que ello condujera pronto a una coincidencia que permitiese al Subcomité concluir ese tema y comunicar sus conclusiones al Comité Preparatorio antes de que finalizase sus trabajos.

171. Con respecto a los trabajos futuros, partiendo del supuesto de que el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC se constituiría el año siguiente, el Presidente preveía que la primera reunión del Comité podría celebrarse a comienzos de febrero. De ese modo la Secretaría contaría con tiempo para preparar la documentación solicitada. El Presidente habría de consultar a las delegaciones y a la Secretaría para determinar una fecha adecuada alrededor de esa época. En la reunión siguiente, como se había convenido en la anterior, el Comité habría de examinar el punto 7 de su programa de trabajo, relativo a la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, para un primer intercambio de opiniones sobre sus aspectos de fondo. También consideraba importante que el Comité siguiera avanzando en el examen de los demás puntos del programa de trabajo que se habían señalado para su enfoque especial, es decir, los puntos 1, 3 y 6. Propuso que, con ese fin, se permitiese que los tres puntos volvieran a discutirse en la próxima reunión. Sobre la base de esa discusión, y de las que acaso se realizaran en reuniones posteriores, el Comité podría examinar la posibilidad de desglosarlos en subpuntos específicos en torno de los cuales podría organizar su labor. El Presidente no deseaba proponer ningún subpunto de esa clase, pero sugirió que las delegaciones contemplaran la posibilidad de avanzar por esa vía y reflexionaran sobre los posibles subpuntos de los tres puntos que el Subcomité había abordado y en los cuales les interesara que se concentrase el trabajo. Todo ello era sin perjuicio de cualquier otro punto o cuestión que las delegaciones desearan plantear y de los documentos que quisieran presentar en cualquier momento para su examen por el Comité.